



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**



**TESIS**

**Análisis del decreto legislativo N.º 1459 y del decreto supremo  
N.º 004-2020-JUS en función a la situación de la población  
penitenciaria peruana en el contexto de la pandemia del covid-  
19, Chiclayo 2020**

**ASESOR:**

Abg. Cesar Vargas Rodríguez

**PRESENTADO POR:**

Bach. Juliana Pamela Gastelo Villena

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADA**

**Fecha de sustentación: 17 de agosto del 2022**

**LAMBAYEQUE, 2022**


**Tesis denominada:** ANÁLISIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N.º 1459 Y DEL DECRETO SUPREMO N.º 004-2020-JUS EN FUNCIÓN A LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PERUANA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, CHICLAYO 2020



---

**Bach. Juliana Pamela Gastelo Villena**

**Autora**



---

**Abg. Cesar Vargas Rodríguez**

**Asesor**

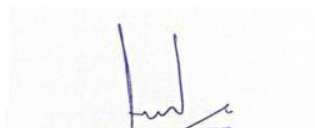
**APROBADO POR:**



---

**Abg. Carlos Manuel Martínez Oblitas**

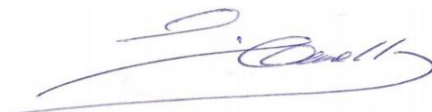
**Presidente**



---

**Dr. Amador Nicolás Mondoñedo Valle**

**Secretario**



---

**Mg. Carlos Manuel Antenor Cevallos de Barrenechea**

**Vocal**

## **DEDICATORIA**

A los seres más preciados de mi vida, mis amados padres: Othon y Consuelo; por su infinito amor, apoyo, perseverancia y por nunca dejarme sola en este trayecto de la vida, sin ustedes nada sería posible.

A mis hermanos Yamir y Edin, por todo su apoyo y cariño brindado; son un gran ejemplo profesional en mi vida.

A mi querido Stalin, por estar presente en cada logro de mi vida, por motivarme a creer siempre en mí y luchar por mis sueños.

A todos ustedes, de corazón, muchas gracias.

## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco infinitamente a Dios por su enorme amor, protección y guía en el sendero de la vida; a mis maestros por el gran aporte de conocimientos a lo largo de esta maravillosa carrera y a todas las personas que contribuyeron en mi formación académica.

## ÍNDICE

DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
RESUMEN .....	vii
ABSTRACT .....	viii
INTRODUCCION .....	ix
CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS .....	11
I. ASPECTOS METODOLÓGICOS .....	12
1. Realidad problemática .....	12
1.1. Formulación del problema .....	14
1.2. Justificación e importancia del estudio .....	15
1.3. Objetivos .....	16
1.3.1. Objetivo General .....	16
1.3.2. Objetivos Específicos .....	16
1.4. Hipótesis.....	16
1.5. Variables .....	16
1.5.1. Variable independiente.....	16
1.5.2. Variable dependiente .....	17
1.6. Operacionalización .....	18
1.7. Diseño de contrastación de hipótesis .....	19
1.8. Población y muestra .....	19
1.9. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos .....	19

1.9.1. Métodos .....	19
1.9.2. Técnicas.....	19
1.9.3. Instrumentos .....	20
1.9.4. Análisis estadísticos de los datos.....	20
CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL.....	21
2. MARCO CONCEPTUAL.....	22
2.1. Antecedentes del problema.....	22
2.2. Base teórica.....	24
2.2.1. Naturaleza jurídica del sistema penitenciario peruano.....	24
2.2.2. El tratamiento penitenciario.....	25
2.2.3. Prisión preventiva y las cárceles peruanas .....	32
2.2.4. Sobrepoblación penitenciaria .....	34
2.2.5. El hacinamiento y la sobrepoblación en los penales: necesarias precisiones conceptuales .....	36
2.3. Definición de términos.....	67
CAPÍTULO III: ANALISIS Y RESULTADOS.....	70
3.1. Análisis de los resultados .....	71
CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTEIS.....	87
CAPITULO IV:CONCLUSIONES .....	93
CAPITULO VI: RECOMENDACIONES.....	96
REFERENCIAS.....	98
ANEXOS .....	102

## **RESUMEN**

La presente tesis tiene como objetivo determinar si la aplicación del Decreto Legislativo N.º 1459 y el Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS, permitirán disminuir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, ante la actual situación del COVID -19, siendo que el problema de la sobrepoblación penitenciaria es una realidad que abarca desde hace varias décadas, sin embargo, como consecuencia de esta situación nefasta a nivel mundial, se agravado la problemática del hacinamiento carcelario, por ello, necesariamente se ha visto obligado el Estado en adoptar nuevas medidas normativas para combatir el hacinamiento carcelario, como la publicación del Decreto Legislativo 1459, y el D.S. 004-2020. Estos dispositivos normativos tienen como finalidad principal reducir la sobrepoblación penitenciaria, debido a que en los centros penitenciarios no se cuenta con una eficaz infraestructura y personal penitenciario capacitado para afrontar la actual pandemia, para garantizar a los reclusos su salud y vida, ante un posible contagio, especialmente aquellos reclusos que son considerados población en riesgo.

La presente investigación es básica, descriptiva simple no experimental, cualitativa, por cuanto, se abordó aspectos teóricos del derecho penitenciario como sistema penitenciario, el hacinamiento penitenciario, los fines de la pena, los alcances jurídicos-normativos del Decreto Legislativo 1459, de fecha 14.ABR.2020, y el D.S. 004-2020 de fecha 23.ABR.2020, entre otros aspectos teóricos relevantes en la problemática socio jurídica investigada.

**Palabras claves:** Hacinamiento carcelario, sobrepoblación penitenciaria, sistema penitenciario, Decreto Legislativo N.º 1459 y el D. S. N.º 004-2020-JUS.

## **ABSTRACT**

The objective of this thesis is to determine if the application of Legislative Decree No. 1459 and Supreme Decree No. 004-2020-JUS, will reduce overcrowding in prisons nationwide, given the current situation of COVID -19, being that the problem of prison overcrowding is a reality that has been going on for several decades, however, as a consequence of this disastrous situation worldwide, the problem of prison overcrowding is aggravated, therefore, despite the fact that the State to adopt new regulatory measures to combat prison overcrowding, such as the publication of Legislative Decree 1459, and D.S. 004-2020. The main purpose of these regulatory devices is to reduce prison overcrowding, due to the fact that prisons do not have an effective infrastructure and trained prison staff to deal with the current pandemic, to guarantee inmates their health and life, in the face of a possible contagion, especially those inmates who are considered a population at risk. The present investigation is basic, descriptive, simple, non-experimental, qualitative, since theoretical aspects of prison law were addressed as a prison system, prison overcrowding, penalty fines legal-normative scope of Legislative Decree 1459, dated 14 APR.2020, and D.S. 004-2020 dated 23.APR.2020, among other relevant theoretical aspects in the socio-legal problem investigated.

**Keywords:** Prison overcrowding, prison overcrowding, prison system, Legislative Decree No. 1459 and Supreme Decree No. 004-2020-JUS



## **INTRODUCCION**

La crisis sanitaria y la propagación masiva del Covid 19, puso en evidencia las debilidades más profundas que experimentamos como país, siendo una de estas el hacinamiento penitenciario, el cual es un problema que aqueja desde hace décadas a nuestro país, y que con el transcurrir del tiempo no ha sido solucionado por el Estado. Es así que durante la Covid-19 el hacinamiento penitenciario, ha genera indubitavelmente una afectación directa a los derechos de la población penitenciaria, ya que es de conocimiento público que han fallecido personas en los centros de internamiento penitenciario como consecuencia de la pandemia, tanto de los reclusos como de los trabajados penitenciarios, por lo que siguiendo los parámetros de la Constitución Política del Perú la cual establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado, los internos privados de su libertad, no pierden su condición de ser humano, mantienen y conservan su condición de personas con dignidad que ante situaciones extremas como de salud pueden obtener determinados beneficios a fin de que el Estado pueda garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, por lo cual el estado se ha visto obligado a adoptar nuevas medidas normativas de urgencia para combatir el hacinamiento carcelario, como la publicación del Decreto Legislativo 1459, (optimizar la conversión de las penas en los casos de omisión a la asistencia familiar), y, el D.S. 004-2020 de fecha 23 de abril del 2020 (otorgamiento de gracias presidencias en el estado de emergencia sanitaria por el Covid-19).

Estos dispositivos normativos tienen como finalidad principal reducir la sobrepoblación penitenciaria, debido a que en los centros penitenciarios no se cuenta con una eficaz infraestructura y personal penitenciario capacitado para afrontar la actual pandemia.

# **CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS**

## **I. ASPECTOS METODOLÓGICOS**

### **1. Realidad problemática**

Producto de la crisis causada por la pandemia del COVID-19, el estado peruano como mecanismo de protección para la ciudadanía ha incorporado medidas como el toque de queda desde la 5 a.m. hasta las 8 p.m, el aislamiento social, el cual impedía concurrir en lugares que puedan incrementar el contagio masivo y todo ello ocasiono que se realice un cambio rotundo en la vida de los pobladores.

Por otro lado, estas medidas también provocaron que el índice de criminalidad en las calles descendiera considerablemente, pues, como señaló en su momento el expresidente Martín Vizcarra, a fines de marzo del 2020 (inicio del estado de emergencia), la delincuencia cayó aproximadamente en un 84%. Sin embargo, en la actualidad al no existir un aislamiento social obligatorio, estos delitos han vuelto a incrementarse en diferentes partes del país.

Por ello, la realidad actual de las cárceles es muy crítica, ya que el hacinamiento y la sobrepoblación agrava aún más el estado de salud del centro penitenciario, lo cual es una carencia importante, ya que el número de médicos que laboran en las cárceles es muy inferior al número de las personas reclusas. Es cierto que las condiciones asociadas al trabajo del personal médico son peligrosas, ya que faltan los medicamentos necesarios y las ambulancias equipadas.

A nuestra concepción, el Decreto Legislativo N° 1459 y el D. S. N° 004-2020-JUS son dos instrumentos legales que han contribuido notoriamente

en el deshacinamiento de la población penitenciaria. Sus efectos han sido positivos de acuerdo al objeto de la Ley, pero su aplicación debió ser ampliada a más puntos estratégicos del sistema penitenciario peruano.

Así también, nuestro planteamiento o propuesta respecto de la crisis del sistema penitenciario peruano, se encuentra dentro del marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratados internacionales, Constitución Política y la normativa nacional. Esto en aras de contribuir como posible solución a la grave crisis del sistema penitenciario nacional.

Durante esta crisis que atraviesan los centros penitenciarios de todo el país, el congestionamiento y la mala salud los hace vulnerables a enfermedades altamente contagiosas como el COVID-19, que pone en vulnerabilidad a reclusos y personal penitenciario (agentes de seguridad, personal administrativo y personal sanitario). Por lo tanto, se deben tomar medidas para reducir la densidad carcelaria como, por ejemplo, el Decreto Legislativo N.º 1459, el cual tiene como propósito principal la correcta optimización de conversión automática ante las personas que han sido condenados por el delito de Omisión a la asistencia familiar, con el propósito de reducir el existente hacinamiento que se tiene en los centros penitenciarios y de esta manera se evitara el incremento de contagios del Covid-19.

Actualmente con las medidas interpuestas por el Estado debido al COVID-19, el reto es disminuir el hacinamiento penitenciario sin violentar ningún derecho constitucional ni ningún proceso, pues lo que se busca es que dentro de los penales se evite el contagio de la enfermedad

producida por el COVID-19, por lo tanto, comparto la posición asumida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema (2015), en donde considera lo siguiente:

*“La figura jurídica de la privación de libertad impide que el condenado obtenga los fondos necesarios de conformidad con su obligación legal de mantener a su hija menor de edad; Lo cual se contradice el objetivo del código penal establecido; Por el contrario, la joven hija del imputado puede estar en peligro de perder la oportunidad de obtener la pensión alimenticia” (Consulta 13825-2015).*

Finalmente, las instituciones involucradas en el sistema penitenciario nacional, esto es, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, los colegios de abogados del país, entre otros, deben de asumir liderazgo y acción, pues la grave crisis por la pandemia lo requiere. A medida que avanza el tiempo, la crisis del sistema penitenciario también avanza.

### **1.1. Formulación del problema**

¿El Decreto Legislativo N.º 1459 y el Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS permitirán disminuir el hacinamiento penitenciario ante la actual situación del COVID -19?

## **1.2. Justificación e importancia del estudio**

La presente investigación se justifica en que el hacinamiento penitenciario viene siendo una problemática real agravada aún más por la pandemia originada por el covid-19. Como respuesta a dicha problemática se han venido adoptando medidas que busquen reducir la sobrepoblación penitenciaria, debido a que los centros penitenciarios no cuentan con una infraestructura adecuada ni con el personal capacitado para afrontar dicha crisis sanitaria. Es evidente que no se puede garantizar el óptimo estado de salud de los reclusos ante un posible contagio, especialmente aquellos que son considerados como población en riesgo como personas mayores de 60 años, mujeres gestantes, personas que padecen de alguna comorbilidad como diabetes, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, hipertensión arterial, etc.).

La importancia del estudio de la presente investigación radica en que entre las medidas que se han adoptado para reducir el hacinamiento penitenciario está el Decreto Legislativo 1459, de fecha 14 de abril de 2020, decreto que busca optimizar la aplicación de la conversión automática de las penas para personas condenadas por omisión a la asistencia familiar en aras de reducir el hacinamiento carcelario y evitar contagios de Covid-19); y, el D.S. 004-2020 de fecha 23 de abril de 2020, que establece los supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de gracias presidenciales en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19). En ese sentido, es necesario saber si estas “medidas legislativas” realmente permiten garantizar la protección de los

derechos fundamentales de los internos y la disminución del hacinamiento carcelario.

### **1.3. Objetivos**

#### **1.3.1. Objetivo General**

Determinar si el Decreto Legislativo N.º 1459 y el Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS han disminuido el hacinamiento penitenciario ante la actual situación del COVID -19.

#### **1.3.2. Objetivos Específicos**

- a. Analizar la situación actual de los establecimientos penitenciarios y su actuar frente a la pandemia COVID- 19.
- b. Identificar la aplicabilidad del Decreto Legislativo N.º 1459 y el Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS en los establecimientos penitenciarios.
- c. Examinar las consecuencias jurídicas del Decreto Legislativo N.º 1459 y el Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS.

### **1.4. Hipótesis**

Si se aplica el Decreto Legislativo N.º 1459 y el Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS ante la actual situación del covid-19, entonces se determinará la disminución del hacinamiento penitenciario”.

### **1.5. Variables**

#### **1.5.1. Variable independiente**

Aplicación del Decreto Legislativo N.º 1459 y del Decreto



Supremo N.º 004-2020-JUS

**1.5.2. Variable dependiente**

Hacinamiento y sobrepoblación penitenciaria.

## 1.6. Operacionalización

Variables	Dimensiones	Indicadores	Ítem / Instrumento
<b>V. Independiente</b>  Decreto Legislativo N.º 1459 y del Decreto Supremo N.º 004-2020- JUS.	Política penitenciaria  Reducción del hacinamiento  Indulto por razones humanitarias	Evitar Contagios de COVID-19.  Procedimiento Especial de Conversión de Penas Privativas de Libertad.  Condiciones infrahumanas.	Escala de Likert  Encuesta
<b>V. Dependiente</b>  Sobrepoblación y hacinamiento penitenciario	Sistema penitenciario  Sobrepoblación penitenciaria  Hacinamiento penitenciario	Prisión preventiva  Tratamiento penitenciario  Resocializador de las penas	

### 1.7. Diseño de contrastación de hipótesis

La investigación presente ha sido desarrollada con un diseño conocido como no experimental, ya que no existe alguna manipulación de las variables.

### 1.8. Población y muestra

**Población:** Considerado como la totalidad de personas que se encuentran incluidos en un determinado lugar, es por ello que la población estará constituida por abogados especialistas en Derecho Penal del Distrito Judicial de Chiclayo.

**Muestra:** Es definida como el sub conjunto de la totalidad que formara parte de la investigación es por ello que estará conformado por 50 participantes, los cuales serán encuestados por un listado de 15 preguntas.

### 1.9. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos

#### 1.9.1. Métodos

**El Método Inductivo:** Parte de lo particular para llegar a lo general. Análisis de caso por caso en relación al tema de investigación.

**El Método Deductivo:** Parte de lo general para llegar a lo particular

#### 1.9.2. Técnicas

**Encuesta:** Técnica que servirá para el recojo de información correspondiente al tema de investigación, donde se empleará como instrumento el cuestionario, el cual será ser aplicado a abogados especialistas en Derecho Penal de la ciudad de Chiclayo.

### **1.9.3. Instrumentos**

**Cuestionario:** La encuesta es considerada como el instrumento fundamental para la recolección de datos, las cuales estarán dirigidas a los abogados especialistas en Derecho Penal de la ciudad de Chiclayo.

### **1.9.4. Análisis estadísticos de los datos**

Información obtenida mediante la aplicación de métodos y medios de recolección de datos ya aplicados a los informantes o fuentes antes mencionados; Se analizan como información relevante que permite diferenciar la hipótesis de la realidad, así mismo es incluida en la investigación. El porcentaje de datos recopilados que fueron obtenidos por la encuesta, están representador en forma de tablas y gráficos estadísticos.

#### **Forma de análisis de las informaciones**

Se realizan valoraciones objetivas en relación con la información presentada en forma de resúmenes, diagramas y gráficos. Las variables que se cruzan en una subhipótesis dada se utilizan para complementar la información proveniente del dominio, a diferencia de esa subhipótesis. El resultado de la confirmación de cada subhipótesis (que puede ser prueba completa, prueba parcial y negación o negación completa) proporciona una base para formar una conclusión parcial (es decir, tenemos tantos resultados parciales que ayudaran a probar la hipótesis planteada en la investigación).

## **CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL**

## **2. MARCO CONCEPTUAL**

### **2.1. Antecedentes del problema**

#### **Internacionales**

Mateus (2020), analizó que El hacinamiento de las cárceles en América Latina es una clara violación de los derechos humanos de los presos. El miedo al contagio y la propagación del Covid-19 en las cárceles han provocado malestar amotinamientos en algunos de los centros penitenciarios. Los Gobiernos han intentado responder a la situación con medidas que han sido insuficientes.

Miñano, Barrueto (2020), ha estimado que las cárceles de América del Sur, como Perú, se consideran fuente de enfermedades infecciosas por condiciones como la comunicación cercana, inevitabilidad, falta de aire, falta de agua potable, productos de higiene e ineficiencia y el acceso limitado a los riesgos de la atención médica.

Carranza (2012), determina que en el estado de los sistemas penitenciarios en América Latina y el Caribe hay dos cuestiones principales: la ubicación real en las cárceles y la gran cantidad de personas, por un lado; y préstamos, nombramientos y formación del personal penitenciario, por otro. Estos dos factores se examinarán analizando y evaluando las violaciones de derechos humanos que han resultado del fracaso de los sistemas penitenciarios.

Pastor (2017), A partir de una extensa investigación sobre este tema procedente de diversas fuentes estadísticas oficiales, contradictorias y solventes, se analiza la realidad del sistema penal desde una perspectiva comparada e internacional y la población carcelaria de España. Del mismo modo, un análisis detallado del carácter transversal y longitudinal de la comparación entre Estados Unidos y los países de la Unión Europea. (2000-2015).

Osses (2013), La población carcelaria está creciendo y sus necesidades de salud están relacionadas con la población más débil. Por otro lado, las personas que han perdido su libertad protegen sus derechos humanos inherentes, incluido el derecho a la salud, y en ocasiones pierden este derecho.

### **Nacionales**

Cárcamo (2015), expresa que el sistema penitenciario peruano había estado en estado de emergencia durante muchos años y era urgente atenderlo. Las cárceles nacionales se encuentran sobrepobladas, lo que genera problemas de salud física y mental de la población carcelaria y dificulta o casi imposibilita la rehabilitación.

Rubio (2020), cuestiona la conversión automática de la pena para los sentenciados por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar (Decreto Legislativo N.º 1459) y la suspensión de los plazos

procesales en la prisión preventiva, señalándola como inaccesible e inconstitucional, respectivamente. Frente a ello, el autor propone soluciones a partir de la modificatoria de dicho Decreto Legislativo, de los supuestos de procedencia de la cesación de la prisión preventiva (artículo 283 del CPP) y del Código de Ejecución Penal para facilitar el otorgamiento de beneficios penitenciarios.

Mollehuanca y Santamaria (2019), Analiza que la política de Estado no es efectiva para dictar sentencias con base en normas disciplinarias internas en el contexto de una alta población penitenciaria que no puede alcanzar el objetivo de sentencia asociado a la reinserción de un recluso.

Chaiña (2014), El servicio de salud del centro penitenciario concluyó que se había violado el derecho a la salud de los reclusos, que no se habían proporcionado ciertos tratamientos especiales y medicamentos que requerían un tratamiento adecuado debido al mal estado de salud de los reclusos.

## **2.2. Base teórica**

### **2.2.1. Naturaleza jurídica del sistema penitenciario peruano**

“El marco normativo se encuentra en la Constitución Política, fuente de mayor rango legal, que sigue la línea de la Constitución de 1979”. La Carta Magna en su art. 139, numeral 22 precisa que: “El objetivo principal



de un centro penitenciario es lograr la reeducación, rehabilitación y reincorporación del recluso para la sociedad”. Es decir, su fin es la deseada resocialización del condenado.

Respecto a la naturaleza jurídica de nuestro sistema penitenciario nacional, Solís (2008) señala:

“El actual Código de Ejecución Penal, promulgado por Decreto Legislativo N.º 654 de fecha 31 de julio de 1991, modificado por Decreto Legislativo 1514 y que consta de 148 artículos, Su objetivo principal es establecer reglas generales para el sistema penitenciario nacional existente para la reinserción de los reclusos, de igual forma con el Código de Ejecución Penal, aprobado por el Decreto Supremo N.º 015-2003-JUS, la cual está conformada por reglas del sistema penitenciario, como el Reglamento de Organización y Funciones del INPE, que fue aprobado por el Decreto Supremo N.º 009-2007-JUS (p. 9)”.

### **2.2.2. El tratamiento penitenciario**

Son bien conocidas las diversas críticas que desde distintas concepciones de la criminología se dirigen a la finalidad del tratamiento penitenciario. No obstante, y pese a la seriedad de aquellas objeciones, parece claro que a quien se encuentra privado de su libertad (en cumplimiento de una sentencia condenatoria) el Estado deberá ofrecerle algún tratamiento orientado al logro de aquellos objetivos.

No se nos escapa que, ajena a aquellas críticas relativas a la búsqueda de logros resocializadores, también se advierte cierta desconfianza

respecto de la idea de tratamiento. El tema ha sido planteado agudamente por Rivera (2006) los siguientes términos:

“El tratamiento tiene un papel especial que desempeñar en la lucha dialéctica entre quienes apoyan la intervención actual y quienes la critican. El primero, por lo general con una responsabilidad específica en su implementación, establece una meta y se enorgullece de los programas y sus resultados esperados; Otros se oponen a la inconsistencia del texto legal, su papel como herramienta de disciplina, el significado ideológico de la intervención, así como sus contradicciones y violaciones de la ley o su contribución a la "devaluación" de los derechos fundamentales (pp. 573 y 574)”.

Sin embargo, creemos que detrás de esta discusión existe una confusión de conceptos, pues se mira el posible ofrecimiento de programas de tratamiento como sinónimo de la denominada ideología del tratamiento: modelo teórico que equivocadamente según lo veremos más adelante reducía aquel concepto a las intervenciones terapéuticas derivadas del conductismo, corriente donde el autor del delito aparecía como un elemento negativo y disfuncional para el sistema social, y la terapia, como el único medio para la consecución del milagro de la readaptación.

Bueno (2005) diferencia correctamente ambas nociones al señalar:

La falta de recursos da lugar a suplantarse el tratamiento por la ‘ideología del tratamiento’, que tergiversa los términos realistas en que debe plantearse la oferta al recluso de medios que le permitan

superar sus conflictos de socialización y llevar en el futuro ‘una vida sin delitos’, y la sustituye de hecho por una fe sin asidero en el programa de actividades encaminada a la superación de valores, que puede oscilar entre una utopía sin contenido y la invasión ilícita de la intimidad de la persona (pp. 142 y 143).

Además de la inadecuación de esta afirmación, vemos que esta es también una idea a recordar como un conjunto de actividades para atender al preso y apuntar a cumplir con los objetivos marcados por la ley es decir, la persona que ha sido condenada tendrá la capacidad de comprender y respetar la Ley, y por ende la separación de la sociedad.

Sin duda que el concepto brindado tiene más bien un valor instrumental; toda vez que no refleja la disputa existente (y que acabamos de enunciar) respecto a los contenidos que deben tener las actividades que integran el tratamiento.

Cervelló (2001) ha descrito la evolución del contenido que nutre a aquellas actividades, enfatizando que en sus orígenes estas eran de naturaleza clínica, “por pretender la cura patológica del delincuente” (p. 180). Incluso, destacados autores españoles hace poco confirmaban esta aserción, uno de ellos es García, quien opina que la esencia del tratamiento se encuentra en la actuación de las ciencias de la conducta sobre la personalidad, y califica al resto de las actividades “como ayudas marginales” (García, 1997, p. 59).

Los factores que explican el abandono de este exclusivismo pueden ser diversos, pero hay uno que no debe soslayarse: cierto agotamiento del

modelo teórico conductista en el que se anclaba en algunos casos la formación de los profesionales (psicólogos) que prestan su servicio en las prisiones. Al respecto Bergalliha (1992) realizó una lúcida crítica de este aspecto, señalando lo siguiente:

También pueden encontrarse muestras de ello [se refiere a los objetivos de “orden y disciplina” como única meta de la política penitenciaria] las decisiones tomadas por la administración incluyen el uso de ciertos métodos utilizados para el llamado "tratamiento", que se traduce como una especie de capacitación que las autoridades quieren dar o enfatizar con las actividades de los especialistas (pp. 18 y 19).

Remarcando enseguida lo siguiente:

Conviene preguntarse sobre qué principio se legitima el entramado de intervenciones tendientes a lograr la coherencia de conductas a través del sistema de “premios” a la lealtad del gobierno institucional o de quienes lo representan. Estos premios, aunque legalmente se otorguen [...], corresponden a ciertos patrones psicológicos de reflejos que tienen un efecto definido en el tiempo y se provocan plenamente con el objetivo de lograr resultados inmediatos en una situación predeterminada (Bergalli, 1992, pp. 18 y 19).

Por cierto que nos adherimos a esta valoración sobre todo por cuanto, desde la propia historia de las ideas psicológicas, los autores vienen señalando que el modelo conductista basado en los conceptos de estímulo y respuesta y sus interacciones viene encontrando, desde la

década de los setenta del siglo pasado, “una creciente oposición nacida de muy distintos campos”; lo que ha impulsado a muchos investigadores “hacia modelos alternativos que tuvieran en cuenta lo que ocurre en el interior del sujeto a la hora de hacer frente a las situaciones de su entorno, antes de responder de una u otra manera” (Carpintero, 2005, p. 423).

Frente al panorama recién descrito es lógico que en la actualidad se haya producido una evolución en lo que atañe al contenido de las actividades propias del tratamiento “la cuales tiene como propósito principal la resocialización mediante la ejecución de deportes, trabajo en equipo y entre otros métodos favorables para el reo” (Cervelló, 2001, p. 180).

Como muestra de ello, y apelando a una perspectiva ius comparada, es posible observar la diagramación del tratamiento en el Reglamento Penitenciario español de 1996; el que, apartándose sustancialmente de la concepción tradicional de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 y sin desconocer la posible utilización de técnicas terapéuticas psicológicas, aboga, en su art. 110, por un programa más ambicioso, concretizado a través de los siguientes objetivos:

- a) “Diseñar programas formativos para desarrollar las aptitudes de los internos, enriqueciendo sus conocimientos y mejorando su capacidad profesional”;
- b) “Utilizar técnicas psicosociales para mejorar la capacidad de los penados, trabajando sobre los problemas que hubieran podido influir en la conducta delictiva (por ejemplo, actuar sobre las carencias

concretas que tenga el interno en el plano personal, como puede ser el autocontrol de una personalidad agresiva)", y

c) Potenciar los espacios de contacto del recluso con el exterior.

Respecto a las características que debe asumir el tratamiento, varias son las precisiones que entendemos necesario formular:

a) En primer término, su voluntariedad. Es indiscutible que el tratamiento debe ser voluntario, de manera que como lo recuerda López (2006) será "Si un condenado libremente toma la decisión correcta y, por lo tanto, se niega a recibir tratamiento, no estará sujeto a ninguna acción disciplinaria" (pp. 55 y 74).

Tal característica resulta fundamental, ya que como señala Roxin (2001):

Si el culpable no está de acuerdo, incluso el mejor trato no tiene sentido. Los esfuerzos terapéuticos solo pueden tener éxito si el prisionero coopera voluntariamente en la resocialización por su propia voluntad. Por tanto, es más probable que el condenado se convierta no sólo en objeto de la pena, sino también en sujeto de la ejecución de la concesión y coadministrador. El fenómeno del castigo ya no es sólo un ejercicio de poder; Tiene muchas apelaciones a la propia iniciativa del condenado para que pueda sostenerse a sí mismo para ayudar (p. 224).

b) En segundo término, este ofrecimiento debe ser de carácter general. Esto significa, por una parte, que no es lícito efectuar ningún tipo de discriminación respecto de la posibilidad de acceso a un tratamiento, sobre la base de ninguna consideración extraña al carácter individualizado que debe tener aquel (art. 8 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad de Argentina). Desde otra perspectiva, y como consecuencia de este carácter, la doctrina penitenciaria considera que este ofrecimiento no debe limitarse a los condenados, sino que, asimismo, debe buscarse una compatibilización con el principio de presunción de inocencia, y admitírsele, también, respecto de quienes se encuentran en prisión preventiva. De hecho, en la legislación comparada, el art. 3.4 del Reglamento Penitenciario español así lo admite. Y en cierta medida, la Ley argentina ya citada se auto declara aplicable a los procesados (art. 11).

En tal sentido, se prevé un régimen de ejecución anticipada voluntaria. En lo personal y respecto de esta última posibilidad no podemos dejar de señalar las dificultades que la más calificada doctrina viene señalando respecto de este régimen de ejecución anticipada; dificultades y tensiones que abrevan en la innegable contradicción que subyace en esta temática. Sin embargo, creemos que debe protegerse cualquier intento de proporcionar una actividad rentable para los delincuentes y alentarlos en el futuro; Esto se debe a que las calificaciones registradas y el paso a paso deben mantenerse y cumplirse durante su integración precisa en el régimen infractor, lo que

les permite acceder con mayor rapidez a procedimientos de ejecución más flexibles (López, 2004, pp. 74 y 75).

- c) Finalmente, un rasgo que viene reclamando la moderna literatura especializada respecto del tratamiento es el de su necesaria apertura al exterior; esto no solo reducirá el tiempo disponible en la propia prisión, sino que también aumentará la cooperación entre las agencias del sector público y privado, desde el exterior, para acceder a las cárceles para que participen en la implementación de las actividades sociales.

### **2.2.3. Prisión preventiva y las cárceles peruanas**

La pandemia ha puesto en evidencia las debilidades más profundas que experimentamos como país. Entre una de las más importantes resalta el hacinamiento penitenciario, que ya ha tenido sus efectos con los motines en los diversos centros penitenciarios en todo el territorio nacional. Se tiene como dato que de los 86 812 internos a nivel nacional, 30 984 se encuentran procesados. Esta cifra indica que el 36 % de internos esperan la emisión de una absolución o sentencia firme por parte del juzgador; información obtenida del INPE a Mayo del 2021.

Se puede apreciar en estas cifras que en nuestro país se ha producido un exceso de las prisiones preventivas, y se ha desconocido el informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, que en una de sus conclusiones señala lo siguiente:

Con base en el análisis presentado en este informe, la Comisión ha prestado especial atención a la detención temprana, por lo que, con



la debida atención a la gran cantidad de personas que gestionará, implementará y administrará, también promueve el uso de condiciones restrictivas. La Comisión sigue insistiendo en que la implementación de estas disposiciones es una de las mejores formas de gestionar los Estados:

a) evitar la desintegración y estigmatización comunitaria derivada de las consecuencias que genera la prisión preventiva;

b) disminuir las tasas de reincidencia, y

c) utilizar de manera más eficiente los recursos públicos. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Hizo hincapié en la necesidad de utilizar estas medidas para garantizar los derechos de los detenidos, dado que los detenidos tienen menos probabilidades de ser absueltos que los liberados antes de un juicio.

La excepcionalidad de la prisión preventiva es un tema que ha sido debatido constantemente por diferentes especialistas, sin existir alguna influencia en el juzgador o acusador, lo cual ha tenido como consecuencia , a partir de la reforma procesal penal en nuestro país, de un exponencial hacinamiento en cada uno de los establecimientos penitenciarios y, por ende, ha conllevado a que existan problemas graves en las cárceles, que necesitan toma de decisiones políticas de quienes dirigen los diversos organismos del Estado involucrados, los cuales de manera multidisciplinaria deben velar por encontrar las soluciones, teniendo en cuenta que la pandemia con el pasar del tiempo se torna aún más grave

y no nos encontramos libres de a travesar situaciones de igual o mayor índole que esta.

#### **2.2.4. Sobrepoblación penitenciaria**

Nalhe (2003) define la sobrepoblación de la siguiente manera:

Condiciones en las que la densidad de población se extiende hasta el punto de degradar el ambiente, reducir la calidad de vida o provocar su colapso por falta de disponibilidad de recursos renovables y no renovables, lo que dificulta la supervivencia del grupo (p. 22).

De acuerdo a lo señalado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el estado peruano no es ajeno frente a este problema, ya que en el 2020, se han evidenciado 97493 reclusos, los cuales 61562 son personas con sentencias firmes, el cual es representado por el 63.15% de la población penitenciaria y el 35931 se encuentran en la calidad de investigado o procesado, así mismo se encuentra representado por el 36.85% de la población penitenciaria.

En este sentido, hubo que tomar medidas de emergencia por parte de los sectores relacionados con el sistema penitenciario para superar la crisis de décadas. La no superación de este problema afecta a la sociedad de diferentes formas.

En la actualidad, el mayor porcentaje de países “tercer mundo” padecen de ese mal llamado sobrepoblación o hacinamiento en los diversos centros penitenciarios. Siendo así, que para poder determinar cómo esa

condición perjudica el adecuado funcionamiento de los centros, se debe determinar cuáles son los objetivos que justifican su existencia de manera primordial.

Según el autor Cárcamo (2015) Las prisiones tienen como objetivo aislar al delincuente y socializarlo a través de diversos mecanismos y reintegrarlo a la sociedad” (p. 17).

Sin embargo, esta postura se corresponde con los fines de la pena y medidas de seguridad establecidos en el art. IX del CP, en donde se tomaba una toma una postura similar, ya que considera que el objetivo de los centros penitenciarios es la de modificar el comportamiento del individuo, volverlo positivo para que puedan reingresar a la sociedad sin problema alguno, aunque está claro que no todas las personas podrían ser reeducadas o finalmente no desean ser resocializadas (Cuba, 2017, pp. 21 y 22).

Según datos estadísticos indicados por el INPE, existen en total 69 establecimientos penitenciarios con una población total de 86 812 internos, excediendo sus capacidades de albergue consistente en 40 899 internos, generándose un porcentaje de sobrepoblación aproximado de 112 % y un hacinamiento del 92%.

Esta sobrepoblación generaría falta de recursos y escasez de profesionales, provocando la falta de medios para reparar herramientas o máquinas necesarias para el desarrollo de las cárceles productivas, así como la ausencia de todo instrumento para la realización de un trabajo o del taller; otra consecuencia se da en relación a los alimentos y

medicinas, debido a que la carencia de productos conllevaría al uso de aquellos que se encuentren con fecha de vencimiento y que a la larga vendrían siendo dañinos para los sujetos que cumplen su pena.

Autores como Caruajulca (2018), mencionan que:

El señor Fernández Millán como representante y jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios, explica que los centros penitenciarios que se encuentran saturados o sobrepoblados genera que los servicios que se le otorgar como salud, alimentación, reinserción y entre otros aspectos no son los adecuados (p. 21).

En conclusión, la sobrepoblación en centros penitenciarios generaría la vulneración de los objetivos de la pena y la falta de eficacia de los programas de resocialización y de tratamiento de los prisioneros, pues para lograr un buen tratamiento se debe contar con programas elaborados de manera eficiente, una infraestructura y materiales adecuados para que se pueda aplicar todos aquellos talleres y medidas especializadas en la reinserción del interno.

#### **2.2.5. El hacinamiento y la sobrepoblación en los penales: necesarias precisiones conceptuales**

Los términos superpoblación y hacinamiento se le clasifican a los centros penitenciarios. Al respecto, apoyamos algunos factores que ayudan a determinar si estos términos están relacionados con el mismo tema o si son el resultado uno del otro. Recientemente se han emitido normas que demuestran que el Estado está interesado en dar libertad a las personas que se encuentran condenadas, y su principal motivación son los

disminuir la sobrepoblación en las cárceles. Este hecho objetivo es que la congestión crea condiciones contrarias a la salud humana y, lo que es peor, provoca una cadena de contagios no solo para quienes cumplen condena o esperan juicio, sino también para quienes trabajan en los centros penitenciarios.

El hacinamiento implica no sólo operaciones matemáticas a partir de las cuales se puede predecir la existencia de un hacinamiento de reclusos y la falta de plazas, una visión cuantitativa, sino también una aproximación cualitativa para demostrar si existe una situación de hacinamiento, es decir, dada la densidad de población. Por lo tanto, la evaluación de la congestión no solo incluye la cantidad de metros cuadrados que existen para los presos, sino también si el agua, la electricidad, los talleres u otros servicios están correctamente distribuidos, lo que obviamente no sucede. Así, cuantas más personas se asignen al espacio designado, más personas habrá a la hora de utilizar los servicios.

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) “ha calculado el espacio necesario para dormir en una cama en 1.6 m<sup>2</sup> y el espacio necesario para un retrete y una ducha en 1.2 m<sup>2</sup>. Así también, ha especificado que el alojamiento recomendado en una celda individual es de 5.4 m<sup>2</sup> por persona y el alojamiento compartido o en dormitorio debe ser de 3.4 m<sup>2</sup> por persona, que incluye el espacio para las literas, tal alojamiento en celda múltiple debe acoger a diez detenidos a razón de 3.4 m<sup>2</sup> por recluso en una superficie total de 34 m<sup>2</sup> encontrándose incluidos

los servicios sanitarios” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2013, p. 33).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México realizó un informe en el que tomó en cuenta las definiciones propuestas por el Instituto de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), e indicó lo siguiente:

La considerada sobre población es una situación en la que la densidad carcelaria es superior al 100% porque hay más reclusos que la capacidad prevista para la prisión o todo el sistema. La densidad de una prisión es una relación numérica derivada de la fórmula entre la capacidad de la cárcel o sistema penitenciario y el número de internos:  $\text{número de personas} / \text{número de plazas disponibles} \times 100$ .

Cabe mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Analizando la jurisprudencia europea, consideró siete metros cuadrados para cada preso una "guía aproximada y deseable de la prisión".

#### **2.2.6. Normas legales relacionadas con el problema del hacinamiento y sobrepoblación de establecimientos penitenciarios**

Todo lo concerniente a sobrepoblación y hacinamiento en establecimientos penitenciarios de América Latina ha sido un tema de estudio y análisis constante, el cual ha puesto en evidencia un problema latente y ajeno a las autoridades de cada país.

A través del D. Leg. n.º 1325, “publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de enero del 2017, se ha declarado en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por razones de seguridad, salud, hacinamiento y deficiente infraestructura. Y mediante el D. S. n.º 013-2018 se prorrogó los efectos del D. Leg. n.º 1325 por un plazo adicional de veinticuatro meses para revertir, según se indica, la aguda crisis que atraviesan los establecimientos penitenciarios a nivel nacional”.

El 13 de abril del 2020 debido a la pandemia que atravesamos, el Estado Peruano expidió el D. Leg. N.º 1459, el cual señala:

“Que a través de la Ley N°31011, se delega al poder ejecutivo la facultad y potestad para afrontar las circunstancias que surgen a través de la Emergencia Sanitaria Producida por el COVID-19 por 45 días”.

Que, el numeral 1) del artículo 2 de la Ley 31011 , define las competencias legislativas en materia de salud para implementar medidas que permitan la prestación de servicios de prevención, alimentos salud y complementos para las personas eviten ser contagiados con COVID-19; y asimismo, en el numeral 7) del mismo artículo 2, define facultades legislativas para la prevención y protección de personas vulnerables (pobres, mujeres y familiares, adultos mayores, discapacitados, locales o indígenas, personas en centros penitenciarios y juveniles). Desarrollar programas, medidas y mecanismos para brindar asistencia alimentaria y atención a los mismos en caso de emergencia por Covid-19.

El D. Leg. N.º 1459 nos remite al D. Leg. N.º 1325 “se tiene en cuenta que uno de los grandes problemas de esta emergencia es, precisamente, el hacinamiento en las cárceles. En este sentido, la alta congestión en los centros penitenciarios a nivel nacional es fuente de riesgo de contagios como el COVID-19 para los internos y el personal penitenciario (agentes de seguridad, personal administrativo y trabajadores de la salud)”.

Así, el art. 1 del D. Leg. n.º 1459 indica que la finalidad de este decreto es la modificación de los arts. 3 y 4 del D. Leg. n.º 1300, Decreto Legislativo que Regula el Procedimiento Especial de Conversión de Penas Privativas de Libertad por Penas Alternativas, en Ejecución de Condena. Esto hará más efectivo la conversión de la pena ante los condenados por no brindar asistencia a la familia como parte de la Emergencia Sanitaria Nacional.

Es así que, el art. 2 de la mencionada ley modifica al art. 3 del D. Leg. n.º 1300. En este sentido, un procedimiento especial para cambiar la pena de prisión de una persona que no asiste a la familia a penas alternativas durante la ejecución de la pena es automático sólo con la confirmación del pago total. Los daños civiles y la pensión alimenticia requerida se calcularán hasta la fecha de conversión requerida. Además, indica que dicha certificación debe ser presentada ante el juez sin llevarse acabo la audiencia, a la que hace referencia al “art. 6 del D. Leg. n.º 1300. Para estos supuestos no será aplicable el literal b) del art. 3 del D. Leg. n.º 1300, que señala: Haber sido condenado a pena privativa de libertad no mayor de seis (6) años y encontrarse en la etapa de mínima seguridad del régimen ordinario cerrado del sistema penitenciario”.



La norma se enfoca en promover la conversión automática de la pena respecto a un delito no grave, como es el de Omisión a la Asistencia Familiar. Sin embargo, consideramos complicado que el reo efectivamente pague tanto lo adeudado por pensiones alimenticias impagas como la reparación civil, debido a que en estos tiempos de emergencia sanitaria la economía se ha visto seriamente reprimida por la suspensión temporal de los empleos o la imposibilidad de continuar con ciertos trabajos dependientes e independientes.

Asimismo, se conoce que muchas veces los reos recurren a la ayuda de sus familiares directos para pagar este tipo de deudas, lo cual, en estas circunstancias, puede ser difícil. Quizás la norma sería más efectiva si a los condenados por este delito se les diera alguna facilidad en el pago de lo adeudado, de manera que se logre el objetivo propuesto que consiste en descongestionar la prisión y disminuir el riesgo que el reo tiene de contraer el COVID-19. No obstante, la medida puede ayudar a que en nuestro país algunos de los aproximadamente 2700 internos condenados por este delito puedan desocupar la cárcel y descongestionarla. Los resultados se verán tiempo después, a la luz de las estadísticas.

La parte considerativa del D. S. n.º 004-2020 indica lo siguiente:

Durante una severa crisis en las instituciones penitenciarias del país, el hacinamiento y la mala salud son una fuente de infección masiva para los reclusos, hombres y mujeres, así como para el personal penitenciario (agentes de seguridad, personal administrativo y

trabajadores de la salud). La mayoría de las enfermedades infecciosas como el COVID-19.

Que, conforme al numeral 21) del artículo 118 de la norma suprema del Estado, El presidente como representante del estado tiene la facultad de conceder el indulto, las gracias presidenciales y la conmutación de la pena, como poder excepcional, lo cual puede ser favorable en la reducción del contagio del Covid-19, ya que da como resultado un ambiente más saludable y un gran número de cárceles, aumentará la conciencia sobre el número de personas en los aspectos de salud de emergencia nacional, es importante incluir consideraciones específicas para seguir siendo revisadas y recomendadas por la Comisión Presidencial de Caridad para otorgar perdón gratuito y bondad humana, y para cambiar la decisión, no a la sociedad es mala.

Entonces, el objeto de esta norma, según su art. 1 Determinar las expectativas especiales como extraordinarias y condicionadas para que la Comisión de Gracia Presidencial pueda continuar con las disculpas generales y razones humanitarias, así como evaluar y proponer cambios para asegurar que las sanciones sean efectivas en una emergencia sanitaria, anunciado a nivel nacional por el COVID-19.

El artículo 2 de la norma en mención establece los casos en los que puede proceder proceso especial de indulto por razones humanitarias:

- a) Las personas que padecen de alguna enfermedad de nivel crónico, la cual puede empeorar por el contagio del Covid-19 y lo señalado por el Ministerio de Salud;

- b) Personas que padezcan de enfermedades de nivel crónico.

En cambio, el art. 3 prevé los supuestos del proceso especial de indulto común y conmutación de la pena. Para estos casos, la Comisión de Gracias

Las gracias presidenciales pueden ser recomendadas por el mismo presidente de la república, para las personas que se encuentra recluso en un centro penitenciario, las cuales pueden ser por los siguientes motivos:

- a) Cualquier madre que se encuentra condenada y que este con su hijo en el centro penitenciario
- b) Las mujeres que se encuentran en estado de gestación.
- c) Que la persona que se encuentra reclusa su condena sea redimida en los próximos 6 meses.
- d) No se le haya impuesto una condena o pena efectiva no mayor de 4 años
- e) Que sea mayor de 60 años de edad.

Además, los internos e internas, señala que “de forma concurrente, deben tener la condición de primario, no registrar condenas por otros delitos y/o medida de detención a nivel nacional, y no contar con la prohibición legal expresa. Se aprecia que la norma establece restricciones para quienes solicitan un indulto común o una conmutación de pena, pues quienes cometen determinado delitos como los mencionados anteriormente no

son aptos para obtener el beneficio de gracias presidenciales. Esta norma incluye al delito de Omisión a la Asistencia Familiar (art. 149 del CP) como uno de los ilícitos con restricción junto a los delitos contra la humanidad, lavado de activos y terrorismo, entre otros”, para obtener gracia presidencial; pues, contrariamente, el D. Leg. N.º 1459 Intentos de reducir el hacinamiento carcelario mediante la liberación legal de presos condenados por delitos que excluyen la asistencia familiar mediante el cambio de sentencias.

El procedimiento especial del indulto por razones humanitarias, regulado en el art. 4 del D. S. N.º 004-2020-JUS, esto incluye la presentación de documentos tales como Certificado de Registro Judicial emitido a nivel nacional por la Oficina de Registro Penitenciario; En el certificado general suscrito por el condenado se indicará su lugar habitual de residencia, así como la persona que mantiene a su familia; Una copia de la historia clínica del pasante, a cargo del INPE o del organismo de salud, contiene los exámenes complementarios realizados para confirmar el diagnóstico, respectivamente; Y un informe médico basado en la historia clínica que se muestra en el párrafo anterior.

Aunado a esto se debe anexar una copia simple de la sentencia dictada por el juez o la sala penal de ser el caso, con la resolución que indique su estado de consentida o ejecutoriada; el informe de antecedentes penales; y el certificado de no tener algún proceso pendiente con mandato de detención a nivel nacional. Estos son enviados por el Poder Judicial a la

Secretaría Técnica. El procedimiento para el caso del indulto común y la conmutación de las penas es similar.

Teniendo en cuenta que las normas tratadas han sido otorgadas con la finalidad de evitar contagios de la enfermedad causada por el COVID-19 y así evitar su propagación masiva, el procedimiento se realiza por medio de una mesa virtual; existiendo así celeridad en su tramitación. En el caso de los indultos humanitarios, las entrevistas se realizan por videoconferencia, sin embargo, excepcionalmente si el interno o interna tuvieran algún problema médico el cual haga imposible que puedan manifestar su voluntad, esto les servirá como evidencia de su estado de incapacidad. También se entrevista a un familiar del interno y a los profesionales del área de salud y de asistencia social del establecimiento penitenciario respectivo.

En el caso de una solicitud de indulto común y conmutación de la pena, también se “prevé una entrevista para acreditar su proyecto de vida y participación en el tratamiento penitenciario; una entrevista al familiar de la interna o interno y una entrevista a los/las profesionales del establecimiento penitenciario, a través de la cual sea posible acreditar la conducta del interno (a) durante su tiempo de carcelería así como su participación en el tratamiento penitenciario”.

Cabe indicar que la vigencia del D. S. N.º 004-2020-JUS será durante el tiempo que dure el estado de emergencia sanitaria, declarada por el Ministerio de Salud mediante el D. S. N.º 008-2020-SA, y su prórroga, en caso así se disponga. En general, consideramos que esta norma busca

luchar contra el hacinamiento en las cárceles mediante mecanismos que ya existían, como el indulto humanitario, el indulto común y la conmutación de pena, solo que ahora se los ha impulsado y dotado de mayor agilidad para bajar la presión poblacional de los establecimientos penitenciarios. Se entiende que esta medida debe dar resultados en un corto plazo: dado que la pandemia está cobrando vidas día a día. Sin embargo, en este momento no se puede concluir si se logró o no el objetivo, ello se conocerá al finalizar el estado de emergencia, a través de una estadística seria.

Es así que tal como se indicó en los párrafos anteriores, en el contexto de la propagación del COVID-19, se han establecido varias normas a través de resoluciones administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), las cuales son de cumplimiento obligatorio por parte del ejecutivo y poder judicial,

#### **2.2.7. La política penitenciaria destinada a reducir el hacinamiento en el estado de emergencia**

La situación que atraviesan los miles de internos de todo el país no puede ser ignorada, ya sea que sean juzgados o no, nunca perderán su dignidad interna porque no son ciudadanos de segunda clase que sirven como una especie de lugar de detención forzosa. Al respecto, la exposición de motivos del Código de Ejecución Penal de 1991 ha señalado lo siguiente:

“Al fijar la finalidad social de la ejecución criminal, el reo no es una persona excluida de la sociedad, sino que forma parte de ella como miembro activo. El proyecto se basa en el disfrute de los mismos

derechos como ciudadano en libertad, sólo con las restricciones que la ley pueda imponer y la sanción correspondiente”.

En momentos como el actual se debe dejar de lado la relativización de los deseos legítimos de justicia (nunca de venganza o represalia como algunos profesan) e inclinar la balanza hacia el factor humano, rostro que toda sociedad, mínimamente “civilizada”, nunca debe dejar de lado. Y que se cristaliza en todo su sentido y extensión en el principio de humanidad de las penas, que implica que el Estado no puede reaccionar en similar entidad y magnitud que el delincuente, pues su superioridad ética y jurídica se basa justamente en la posibilidad de articular una sanción guiada por la razón y el Derecho.

En este sentido, la doctrina de la supremacía moral del Estado sugiere que el perpetrador debe responder a su conducta con serio respeto a los derechos humanos, a diferencia del agresor (Juliano, 2012, p. 83). Por tanto, el principio de humanidad de las penas implica que la sanción punitiva se despoje de cualquier viso de tormento estatal, de modo que se proscriban las penas contrarias a la dignidad del reo; y que cumpla con su finalidad primordial de hacer todo lo humanamente necesario para que el sujeto infractor de la norma no vuelva a delinquir. El principio de humanidad de las penas debe ser entendido junto con el principio de proporcionalidad, “el cual tiene que ser de índole cualitativa a infracciones de diversa naturaleza y se les deba castigar con penas diferentes; y cuantitativa ya que a cada hecho punible le debe corresponder una sanción que se compadezca con su importancia” (Juliano, 2012, p. 12).

En efecto, la Corte Suprema, a través del R. N. N.º 752-2008 Lima, ha señalado:

La aplicación del principio de proporcionalidad en la sentencia se realiza a través de los tribunales de conformidad, que toman en cuenta la sociabilidad y conducta de la persona, junto con el principio de culpabilidad; La necesidad de determinar si se ha ejercido la detención, la libertad o los derechos restringidos; Y en un sentido serio, la proporcionalidad, por lo que la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito concreto.

Con base en los principios de esta clasificación, que forman la base del derecho constitucional y amplían el sistema penitenciario del país, se deben tomar decisiones tendientes a reducir claramente la población carcelaria en los centros de reclusión del Perú.

En las circunstancias que atravesamos, la reestructuración del sistema penal debe realizarse de acuerdo con las variables de racionalidad, proporcionalidad, progresividad y razonabilidad, y se identificarán los estados que cometieron el delito de acuerdo con la naturaleza del delito. De acuerdo con esta primera variable, la reducción de la congestión penitenciaria debería tener en cuenta un mínimo de delitos graves, con excepción de la asistencia familiar (art. 149 del CP), donde más importante que la retribución penal y que la ejecución de la pena es la manutención del hijo alimentista con el cumplimiento de la obligación alimenticia; pues no tendría sentido el encierro del alimentante ya que



estaría imposibilitado de trabajar, y no por lo tanto sería casi imposible pueda cumplir con su obligación alimenticia a favor de sus descendientes.

Es en tal sentido que se proyecta el último párrafo de la exposición de motivos del D. Leg. N.º 1459, que dispone:

Con el objetivo de reducir el incremento del contagio del Covid-19, y reducir el incremento de la sobrepoblación en los centros penitenciarios, es por ello que es necesario que se mejore los mecanismos de egreso de los reclusos y esto se lograra a través de la conversión automática de la condena del delito de omisión a la asistencia familiar regulada en el artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1300.

Dichos lineamientos programáticos también lo sostuvimos en un artículo reciente, cuando se expidió el Decreto de Urgencia N.º 008-2020, En relación con el cambio de la pena privativa de libertad por la de restricción de derechos, el condenado está obligado a pagar íntegramente la indemnización civil y la deuda por "alimentos" que determine el juez. De esta forma, en el decreto legislativo in comento se indicó:

Se modificó los artículos 3 y 11 del Decreto Legislativo N.º 1300, Incluye el supuesto de conversión de pena en casos de personas privadas de libertad por delitos de falta de apoyo familiar, el supuesto de conversión automática para incentivar la reparación civil y el pago de alimentos; Así como contribuir a la reducción de la congestión en las instituciones educativas.

Por lo tanto, es nuestro deber hacer cumplir estas disposiciones legales, lo que ya significa sacrificar nuestras libertades para proteger la salud pública de todos los ciudadanos; Sin embargo, no debemos ignorar el hecho de que la criminalización, en algunos casos, causa daños innecesarios a la libertad del ciudadano. Además, el contacto con personas que pueden estar infectadas por el virus sin el conocimiento del personal policial y militar produce la llamada agregación asintomática (detención o intromisión de delincuentes), que es la fuente latente del virus.

Por ello exigimos que todas las acciones que determine el Poder Ejecutivo se sujeten al principio de legalidad, proporcionalidad y racionalidad. No en vano la CIDH, a través de su Resolución N.º 1/2020, señaló lo siguiente:

Las acciones de los Estados, en particular aquellas que conduzcan a la restricción de derechos o garantías, deben ser conformes a los principios de proporcionalidad y temporalidad, su fin legítimo debe estar en estricta concordancia con los objetivos de salud pública y protección integral. Y para brindar atención oportuna a la población frente a cualquier otra observación o interés de carácter público o privado.

Incluso en las circunstancias más graves y singulares en las que se deben negar ciertos derechos, el derecho internacional ha impuesto ciertos requisitos como el estatus, la importancia, la equidad y el límite de tiempo para prevenir los derechos y condiciones tales como necesidad

repentina y urgente o en una situación ilegal, opresiva e incapacidad para elegir, que conduce a la violación de los derechos humanos o la destrucción del sistema democrático de gobierno.

#### **2.2.8. Problema o posibilidad del Covid- 19**

La pandemia ha hecho traslucir todos nuestros problemas que por décadas no han sido resueltos o han sido dejados de lado, situándolos en segundo plano. En esa línea, cabe hacernos la pregunta de si el COVID-19 es un problema o bien es una ventana de posibilidades a fin de buscar un replanteamiento de todo el sistema penitenciario peruano.

En la presente investigación hemos tratado de analizar a grandes rasgos el problema del COVID-19 y sus implicancias en el sistema penitenciario peruano. Hemos visto que el D. Leg. N.º 1459 y el D. S. N.º 004-2020-JUS han resultado ser herramientas viables para combatir el hacinamiento de las cárceles. En el caso del D. Leg. N.º 1459, el último reporte del MINJUSDH (del 15 de abril al 7 mayo) señala que alrededor de 559 internos obtuvieron su libertad por el beneficio de conversión de pena al pagar el integro de la deuda y la reparación civil, sin embargo a setiembre del 2021, un total de 1780 internos han obtenido su libertad.

Al mismo tiempo, el D. S. N.º 004-2020-JUS ha contribuido a que varias internas de diferentes penales abandonen las cárceles tras recibir las gracias presidenciales (indulto y conmutación de la pena), según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). En ese sentido, dichas herramientas legales han contribuido en paliar la grave situación que aqueja a los penales hace décadas, lo cual nos debe invitar a

reflexionar y a proponer un trabajo con enfoque de protección de los internos.

Atendiendo a estas consideraciones, si bien el COVID-19 llegó a nuestro país como un problema sanitario que luego ha ido calando en todas las estructuras políticas, económicas y sociales de nuestro país, al punto de producirse protestas, reyertas en los distintos penales, etc., nos invita a convertir dicho problema en la posibilidad de replantear todo el sistema penitenciario peruano, y desde una mirada distinta y un nuevo enfoque buscar el ansiado deshacinamiento de la población penitenciaria.

#### **2.2.9. Problemática actual del hacinamiento penitenciario**

El hacinamiento y sobrepoblación en los centros penitenciarios son algunos de los mayores problemas de la gestión penitenciaria, así como el alto porcentaje de impunes y condenados en algunos casos. Si bien este último tema es responsabilidad del poder judicial y del ministerio público, toma más tiempo del requerido por la ley.

La población penal sentenciada se encuentra conformada por aquellas personas privadas de la libertad que cumplen con una pena impuesta por un órgano judicial dentro de un proceso penal. Según el INPE, hasta mayo del 2021 la población penitenciaria en calidad de sentenciados era de 55 828 internos, de los cuales se resalta que 1539 internos tenían pena privativa de libertad de 31 a 35 años mientras que 1339 internos contaban con pena de cadena perpetua. “A través del informe de Adjuntía N.º 006-2018- DP/ADHPD, la Defensoría del Pueblo indico que, la población penitenciaria ascendía a 89 166 internos e internas; pese a que

la capacidad de albergue a nivel nacional era solo de 39 156 plazas, existiendo un nivel de hacinamiento de 128 %”.

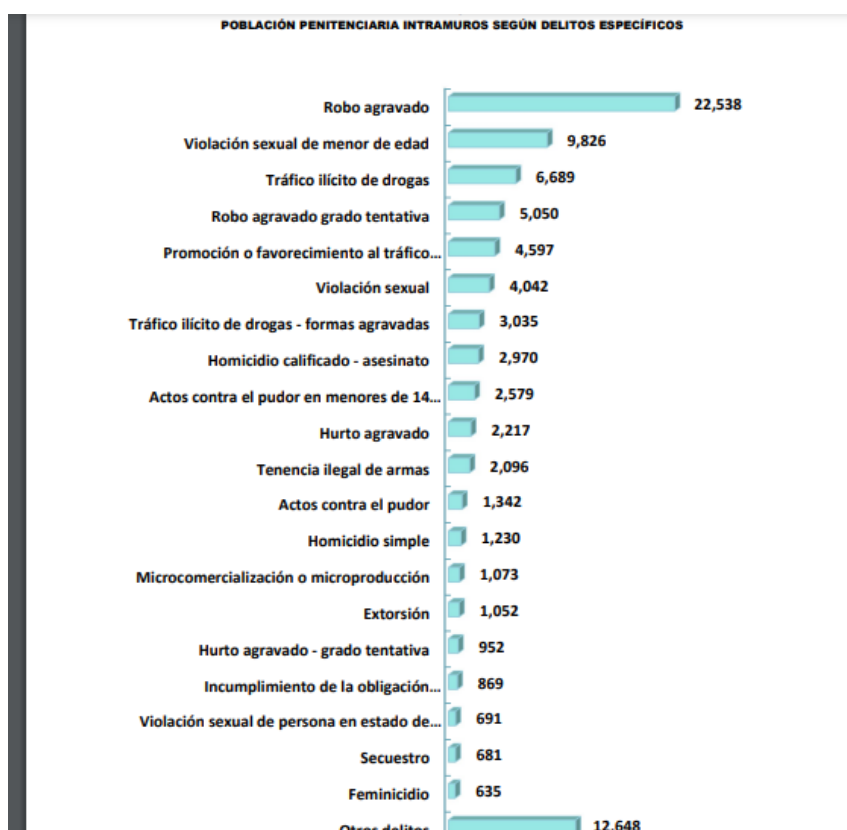
El 6 de abril del 2020, “la Defensoría del Pueblo emitió el Informe Especial N.º 03-2020-DP, que tiene como título: Situación de las personas privadas de libertad a propósito de la declaratoria de emergencia sanitaria”. Este informe indica que la población penitenciaria se encuentra conformada por los internos que están cumpliendo una condena con sentencia firme y aquellos que están siendo investigados y por lo tanto tienen vigente una prisión preventiva”. En la actualidad 2021, funcionan 69 penales en todo el Perú, registrándose una población de 86 812 internos, de los cuales 4 393 son mujeres.

En mayo, 4.686 reclusos tenían más de 60 años. Según el INPE, la población total del sistema penitenciario es de 126.216, de los cuales 86.812 se encuentran en prisión preventiva por sentencia judicial o en prisión preventiva; 39.404 personas asisten a las instituciones porque han sido condenados a derechos limitados, es decir tiene el beneficio penitenciario a una semilibertad.

Del Informe estadístico del INPE mayo del 2021, se tiene:

“El sistema penitenciario está conformado por 126216 reclusos, los cuales el 86812 se encuentra en el establecimiento penitenciario por un mandato judicial de privación de libertad efectiva, por otro lado se tiene 39404 son personas que se encuentra en la modalidad de sentenciados a penas limitativas de derechos.

De los internos que han sido sentenciados o están siendo investigados, se tiene el siguiente gráfico:



Se observa que el delito de Omisión a la Asistencia Familiar “está ubicado en el decimoséptimo lugar encima de varios delitos de gravedad tales como el feminicidio, secuestro, entre otros. Respecto a la situación de los internos que se encuentran infectados de COVID-19, Fernando Castañeda Portocarrero, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos”, refirió lo siguiente:

“Hasta el 28 de abril del 2020, se registraron 645 internos en los establecimientos penitenciarios del país contagiados con la COVID-19. Asimismo, detalló que 30 de ellos fallecieron. De la cifra de infectados, manifestó que 579 permanecen aislados para evitar la

propagación de la enfermedad, mientras que 36 de ellos se encontraban internados en hospitales debido a su crítica condición”.

También informo que “224 trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario arrojaron resultado positivo de la COVID-19, habiendo fallecido hasta esa fecha un total de 7 trabajadores, mientras que informó que 16 están hospitalizados y 201 cumplen el aislamiento social obligatorio en sus domicilios” (La Ley, 2020).

Al mes de abril del 2021, la entonces jefa del INPE, Susana Silva Hasembank; comunico que la cantidad de internos fallecidos eran de 446 y el total de trabajadores ascendían de 46 a nivel nacional

#### **2.2.10. Alcances jurídico-procesales del D. Leg. N.º1459 y del D. S. N.º 004-2020**

Mediante el D. Leg. N.º 1459: “Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la conversión automática de la pena para personas condenadas por el delito de Omisión de Asistencia Familiar, a fin de reducir el Hacinamiento Penitenciario y evitar contagios de COVID-19, se ha modificado el último párrafo del art. 3 del D. Leg. N.º 1300 (Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en Ejecución de Condena), y se ha incorporado un último párrafo al art. 4 de dicho decreto”.

Puesto que resulta necesario potenciar las medidas de egreso penitenciario que no impliquen perjuicios sociales, la presente norma

resulta beneficiosa para los niños y niñas, quienes tendrán su pensión de alimentos; para los internos liberados, quienes estarán en arresto domiciliario, y sobre todo para el deshacinamiento de los penales, que se han convertido en focos infecciosos del COVID-19. Hay que recordar que los condenados por este tipo de delitos no cuentan con perfiles de peligrosidad o agresividad que puedan poner en riesgo a la sociedad. Al contrario, tenerlos en la cárcel es sumar un 3 % de la población penitenciaria ya hacinada, además que el encierro dificulta el pago de deudas.

Cabe resaltar que una sola medida no va a solucionar los problemas estructurales del sistema carcelario, pero esta norma debe invitarnos a reflexionar sobre el exceso de punibilidad y el populismo punitivo estatal, ya que es evidente que no se está generando el efecto disuasivo esperado e irroga un gasto importante al Estado.

Además, tenemos al D. S. N.º 004-2020-JUS: “Decreto Supremo que establece supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de gracias presidenciales, y determina su procedimiento, en el Marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19) y el D. S. N.º 005-2020- JUS (Decreto Supremo que Modifica el D. S. N.º 004-2020-JUS). Este decreto fue emitido en marco del hacinamiento y la aguda crisis que vienen atravesando los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, que afectan a las internas y los internos, así como al personal penitenciario (agentes de seguridad, administrativos y personal de salud), lo que los convierte en focos de contagio masivo de COVID-19”.



Por otra parte, la Corte IDH, en la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20, del 9 de abril del 2020, referida al COVID-19 y los derechos humanos, recomienda lo siguiente:

“Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”.

En ese mismo contexto, resulta muy beneficioso el decreto supremo, máxime cuando sus consecuencias coadyuvan al deshacinamiento de las cárceles del Perú. El hacinamiento es un problema de larga data debido a la sobrepoblación y a las condiciones infrahumanas en las que se encuentran los penales.

#### **2.2.11. El modelo político-criminal neo- criminalizador y la prioridad de la retribución sobre la prevención**

La política criminal como ciencia y practicidad siempre debe tomar en cuenta las diversas circunstancias y factores que rodean la aplicación de la Ley penal en los ciudadanos, así como los estados de criminalización que inciden sobre todo en la pérdida de la libertad de las personas, sea en el marco de una prisión preventiva (y detención preliminar judicial) o en el ámbito de la ejecución de la pena privativa de la libertad, una vez demostrado probatoriamente la materialidad del delito y la responsabilidad penal del imputado (sea como autor o partícipe).

Los estadios de criminalización (secundaria y terciaria) resultan indispensables por razones de justicia (retribución) y prevención (tanto especial como general). Así, la prisión preventiva (medida de coerción procesal) es indispensable para cautelar la efectividad del ius puniendi estatal, así como las otras sanciones (indemnizatorias y consecuencias jurídicas) en el marco de un proceso penal. Dichas finalidades político-criminales se adscriben firmemente en los valores y principios del Estado social y democrático de Derecho, el cual señala que la delincuencia en todas sus expresiones y manifestaciones debe ser objeto de represión y prevención, entre la “justicia” y la “utilidad”.

Somos conscientes de que en los últimos tiempos los modelos de política criminal, producto de la inseguridad ciudadana (sociedad del “riesgo”), insoslayablemente, se han inclinado a la represión (retribución) y no a la prevención, lo cual se viene reflejando en los marcos penales imponentes (pena de cadena perpetua), la gran inclusión de figuras delictivas (alguna legítimas por cierto), la definición de un enorme listado de circunstancias de agravación sobre todo en aquellos delitos que afectan los bienes jurídicos personalísimos de los ciudadanos (la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, etc.) y la casi anulación de beneficios penitenciarios en el caso de los internos que purgan condenas por delitos “graves”, lo que implica la supremacía de la retribución sobre la prevención.

Quienes abogan y propugnan una cultura “carcelaria” se olvidan que el Derecho Penal se desarrolla en un orden democrático de Derecho, es decir, no es útil para excluir personas ni para neutralizar enemigos, sino

para proteger los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad y del individuo, es decir, no se puede suponer a la pena como castigo o vindicta pública. Al respecto, Álvarez (2008) sostiene que “la existencia del Derecho Penal se justifica si y solo si a pesar del coste social que este implica logra la efectiva protección de estos derechos, incluso a pesar de los intereses de la mayoría” (p. 131). A nombre de la mayoría no se puede justificar la imposición de penas no acordes a los principios de humanidad, resocialización y racionalidad punitiva. Si esto es así, cuando el Estado adopta un programa punitivo sostenido en el “retribucionismo” a ultranza, cuyo único fin es colmar los sentimientos de justicia de la comunidad, estaría abandonando completamente el fin preventivo especial positivo de la pena.

#### **2.2.12. El principio de humanidad de las penas y el fin resocializador de las penas en el contexto del COVID-19**

Lo anterior no puede significar de ningún modo que la política criminal pierda esa dosis de “humanidad”, pues del art. 1 de la Constitución Política se desprende el valor principista de la persona humana. No en vano la Carta Magna apunta en su art. 139 que el fin del programa penitenciario es la rehabilitación, resocialización y reincorporación del penado a la sociedad, lo que se conoce como el fin preventivo especial (positivo) de la pena en la teoría del Derecho Penal. Tal proclamación principista se advierte también en el Código Penal y Código de Ejecución Penal, vigentes en la actualidad.

La salud de muchos ciudadanos de nuestro país, así como muchas naciones del orbe se encuentra gravemente afectada, producto de la propagación y contagio masivo del COVID-19, pandemia de efectos casi letales en las personas que la portan. En ese sentido, el Estado, a través de sus autoridades competentes, tiene que dictar políticas públicas encaminadas a evitar en la medida de lo posible que más personas (sean o no peruanos) se contagien con este virus. Así se protegerá la salud pública como bien jurídico supraindividual de primer orden en un Estado constitucional de Derecho. Para ello, es fundamental identificar los focos de propagación del COVID-19, dentro de los cuales se encuentran los establecimientos penitenciarios, que son grandes focos de contagio masivo de esta enfermedad. Incluso este virus ya fue detectado tanto en internos como en el personal del INPE.

Tanto los internos como todo el personal del INPE y de la PNP que custodian los establecimientos penitenciarios del territorio nacional (incluido las carceletas del INPE) constituyen personas “vulnerables” ante el coronavirus (susceptibles de un potencial contagio).

Por tanto, la utilidad no se manifiesta en el encierro carcelario, sino en mantener al condenado en el colectivo social, siempre que esto sea posible. Así, en las ejecutorias supremas se ha seguido esta orientación, que se encuentra consagrada en el art. 139.22 de la Const. Pol. y prevista en el art. ix del CP. Al respecto, la Corte Suprema ha mencionado:

Se determina que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia sea razonable y proporcionada al caso concreto y que responda al

llamado concreto y correcto de la humanidad, así como que oriente la reacción del Estado cuando la Comisión las acepte. Crímenes. Sin embargo, la pena a imponer debe reunir no sólo las circunstancias de la comisión injusta, sino también la intención preventiva de la pena, que no puede traducirse en una verdadera rehabilitación. y la reinserción del condenado en caso de imposición de multas muy severas; Por lo tanto, es incorrecto sustentar la pretensión de juicio político del representante del Ministerio Público.

#### **2.2.13. Las nuevas reglas de la conversión de la pena en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el contexto del COVID-19**

En su momento, cuando se emitió el Decreto de Urgencia N.º 008-2020, indicamos que no se puede anteponer la retribución en ciertos delitos como la Omisión a la Asistencia Familiar, donde la prioridad dada la naturaleza de los bienes jurídicos afectados debe ser la reparación del daño y el cumplimiento efectivo de la pensión alimenticia que el condenado debe abonar a favor del agraviado. Así, en los delitos de mínima y mediana gravedad antijurídica, los lineamientos político-criminales deben orientarse a los intereses de los protagonistas del conflicto y no a las ansias de punición de la sociedad.

Por tanto, dicho Decreto de Urgencia es acertado al permitir de manera taxativa la conversión de la pena privativa de la libertad a una limitativa de derechos, siempre que el condenado cumpla con pagar íntegramente la reparación civil fijada por el juez en la sentencia de condena. De retomar las coordinadas programáticas afincadas por el legislador en el Código

Penal de 1991, de que la pena privativa de la libertad en realidad produce casi y únicamente efectos represivos y retributivos, es indispensable que se tome en cuenta la posibilidad de la “alternatividad sancionadora”, que se presenta a través de los sustitutivos penales y de la conversión de la pena. En consecuencia, aplicar la conversión de una pena limitativa de derechos en lugar de prisión efectiva es una opción válida, desde términos de razonabilidad, reparación y desprisonalización, lo cual comprende evitar la privación de libertad de la persona sentenciada con penas cortas de cárcel, bajo el mandato imperativo del pago íntegro de la reparación civil como de la deuda alimenticia contraída con el agraviado, sin dejar de lado la primera posibilidad, esto es, la aplicación de la reserva del fallo condenatorio.

Desde antes de estar sumidos en este estado de emergencia, la estipulación legal tenía una orientación político- criminal muy clara, de acelerar el trámite y el procedimiento de conversión de penas privativas de la libertad por limitativas de derechos, de hacerlo ágil y expedito en la vía judicial, para que, de ser procedente, en el caso de los agentes que cometieron el delito de omisión de asistencia familiar y que se encuentran purgando carcelería, puedan salir oportunamente en libertad y así ejercer las actividades socioeconómicas que les permitan cumplir con su obligación jurídico-obligacional-alimenticia. En el marco de la pandemia del COVID-19, tal orientación no solo ha hecho efectiva dicha obligación, sino que ahora puede reducir el hacinamiento carcelario de los internos que han cometido hechos punibles de mínima y mediana gravedad (desde un sentido material).

Al respecto, el art. 2 del D. Leg. N.º 1459, que modifica el art. 3 del D. Leg. N.º 1300 ("Procedencia"), ha señalado:

La pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar La sola confirmación del pago íntegro de la reparación civil y del canje puede convertirse automáticamente en sentencia sustitutiva con la pensión alimenticia cobrada hasta el momento solicitado. El juez certificará el anticipo sin mediar en el desarrollo de la audiencia, lo que se indica en el artículo 6. Para estos casos, no se aplica el sentido literal del inciso b) anterior.

Hay que tener en cuenta que la modificatoria en cuestión no supone la liberación del sujeto activo (agente delictual) de su obligación alimenticia, pues para que acceda a la conversión de la pena, en el contexto actual, debe cumplirla íntegramente. Así, lo que se deja de lado o queda suprimido es que la certificación del pago (deuda alimenticia acumulada con devengados) pase por un control judicial en el marco de una audiencia.

Respecto a lo anterior, se prioriza y se da mayor atención a una política penitenciaria que está más cercana a la reducción del hacinamiento de los presidios en el Perú en el contexto del COVID-19 que a los principios de oralidad, inmediación judicial y contradicción (propios del debido proceso), los cuales son necesarios para el desarrollo y articulación del proceso penal. Desde los factores de prevención especial, los agentes

deben acceder a la “alternatividad” sancionadora, que viabilizará la reparación antes que la represión.

Sferlazza (2005) ha señalado que “al término oralidad se le puede atribuir el significado de “comunicación del pensamiento mediante la pronunciación de palabras destinadas a ser oídas”. Contrapuesta a la oralidad está la escritura, la que se entiende como cualquier forma de comunicación del pensamiento mediante signos visibles, alfabéticos o videográficos”. (p. 73)

Bacigalupo (2017), sostiene que la “inmediación judicial es la consecuencia necesaria del reemplazo de la prueba tasada, propia del antiguo proceso secreto. En este contexto, la inmediación se manifiesta como la condición básica que hace que estos actos y esas relaciones, efectivamente, permitan llegar a la verdad del modo más seguro posible. Al respecto, se señala que la comunicación entre tales actos y relaciones y la información que ingresa por diversos canales (medios de prueba) se realizan con la presencia máxima obligada de las personas que deberán dictar una sentencia luego de observar la prueba (los jueces y los jurados)”.

El Derecho de “contradicción” nace precisamente del Derecho de defensa, pues la capacidad de defenderse del imputado implica la posibilidad de desvirtuar, refutar y/o desbaratar la tesis propuesta por su contrincante. Tal escenario es inherente al régimen de audiencias. La contradicción supone que las partes reconozcan, normativamente, los



medios de ataque y de contraataque para argumentar y contrarrestar los fundamentos que esgrime la parte adversaria.

De hecho, una cuestión es que se debata en la audiencia la materialidad del delito y la responsabilidad penal del imputado, así como verificar la concurrencia de los presupuestos materiales de la prisión preventiva; y otra muy distinta es comprobar documentalmente el pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que se solicitó la conversión. Al principio es necesario e importante la realización de la audiencia a fin de dar crédito al pago efectivo de la indemnización, así como de la deuda civil, a efectos de que el representante del Ministerio Público y, de ser el caso, la parte civil pueda presentar ciertas observaciones sobre la efectividad del pago (de los conceptos mencionados). El juez hará un control muy riguroso y estricto y podrá subsanar cualquier observación encontrada, sin defecto de que el persecutor del crimen formule en su oportunidad lo que estime pertinente cuando se le traslade la solicitud del condenado (o de oficio por el juzgador).

Por otro lado, la única disposición complementaria transitoria del D. Leg. N.º 1459 ha señalado:

“Durante el periodo que dure la emergencia sanitaria a nivel nacional declarada por el Decreto Supremo N.º 008-2020-SA, no se exigirá para los casos de conversión automática de pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión de asistencia familiar el requisito señalado en el literal e) del artículo 4

del Decreto legislativo N.º 1300, Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena”.

¿Cuál es ese requisito? “La declaración jurada del interno señalando la dirección del domicilio o residencia habitual, al momento de egresar del establecimiento penitenciario”.

Se supone que una vez que el interno “condenado” egresa del establecimiento penitenciario producto de la decisión favorable de la judicatura (respecto a la “conversión de la pena”), ha de dejar consignado un domicilio o residencia habitual a efectos de que se le pueda localizar cuantas veces sea necesario, ello se concatena con lo previsto en el art. 8 del D. Leg. N.º 1300, que regula el contenido de la resolución jurisdiccional que dispone la conversión:

“La cantidad exacta de jornadas de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres, que el condenado debe cumplir. La orden al condenado de que se constituya, dentro de las veinticuatro (24) horas de haber egresado del establecimiento penitenciario, a la Dirección de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario - INPE o a sus órganos desconcentrados o los que hagan sus veces, a efectos de cumplir con las jornadas impuestas. El apercibimiento expreso de revocar la conversión, en caso de que el condenado incumpla de manera injustificada su ejecución, en cuyo caso se ordenará su inmediata ubicación y captura, a fin de ser

internado en un establecimiento penitenciario, para que cumpla con ejecutar la pena privativa de libertad fijada en la sentencia”.

La excepción acotada implica de cierta manera que se confíe en que al condenado se le va a encontrar en el domicilio que tiene en su DNI o en la información consignada en su solicitud de conversión de pena, por lo que se cede ante ciertas formalidades que tienden a asegurar la ejecución de la pena limitativa de derechos para viabilizar la salida inmediata del penado del presidio y así lograr el fin político-criminal que inspira esta Ley, que no es otra que promover la reducción del hacinamiento de los penales del país en el contexto del COVID-19

Por último, un punto importante a destacar es que el monto a pagar por parte del condenado (“solicitante”) es el acumulado hasta el momento en que solicita la conversión, esto es, desde que se originó la obligación alimenticia, y abarca todo el tiempo en que el sujeto obligado estuvo purgando carcelería. Una posición en contrario supondría que se contabilice solo hasta su ingreso al presidio, lo que vaciaría de contenido material el Derecho que le asiste al agraviado (víctima del delito de omisión de asistencia familiar).

### **2.3. Definición de términos**

#### **Sobrepoblación**

Teniendo en cuenta lo señalado por Rubio (2020) determina que “La sobrepoblación es un fenómeno demográfico que se produce cuando la elevada densidad de la población provoca consecuencias negativas en el

entorno. Sin embargo, las cárceles peruanas solo tienen capacidad para albergar a 40,137 personas, lo que arroja un 141% de sobrepoblación en los penales. Además, al problema de la sobrepoblación se le suman enfermedades, falta de personal médico, condiciones inadecuadas para mujeres embarazadas y niños, ausencia de políticas públicas para adultos mayores, falta de información y más. Sobrepoblación penitenciaria es la situación en la que la densidad penitenciaria es mayor que 100, porque hay más personas presas que la capacidad establecida para una prisión o para la totalidad del sistema”.

### **Hacinamiento**

La Ley (2020) señala que “El hacinamiento constituye la principal característica de los sistemas penitenciarios en América Latina, y uno de los mayores desafíos que los Estados deben asumir, controlar y resolver para asegurar el respeto a los Derechos Humanos, y el seguro y eficiente funcionamiento de los centros penales. De hecho, el hacinamiento ha sido reconocido como uno de los principales problemas de los sistemas penitenciarios, por los organismos regionales e internacionales, los tribunales nacionales, y las administraciones penitenciarias y los Estados”.

### **Prisión Preventiva**

Álvarez (2008), explica que “la prisión preventiva o prisión provisional es una medida cautelar de carácter excepcional, tomada en situaciones de necesidad extrema, mediante la cual un juez dispone privar de su libertad ambulatoria a una persona, durante el curso de un proceso penal en el

que se encuentra acusada, sin que exista una sentencia judicial condenatoria firme, con el fin de prevenir eventuales acciones que puedan dañar a terceros o la marcha del proceso”.

## **Pandemia**

Para Rubio (2020) determina que: “Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales. Para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados sino provocados por transmisión comunitaria”.

## **Covid- 19**

Según la revista jurídica La Ley (2020) señala que: “El COVID19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo”.

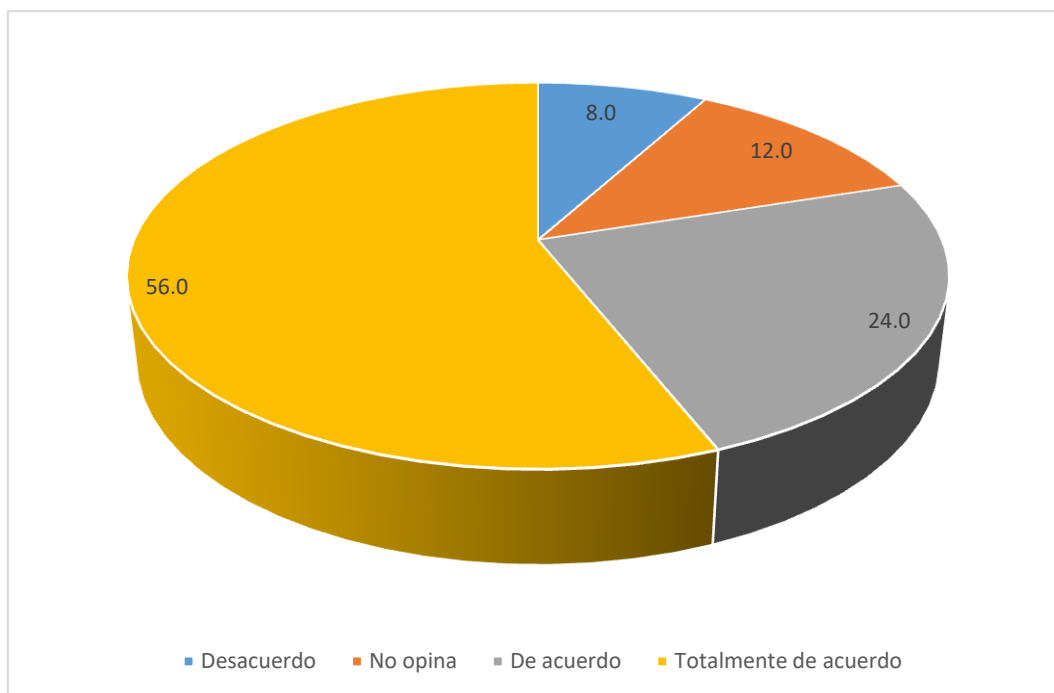
## **CAPÍTULO III: ANALISIS Y RESULTADOS**

### 3.1. Análisis de los resultados

Figura 1.

Conocimiento de las implementaciones normativas propuestas por el Estado para mejorar el hacinamiento penitenciario en tiempos de Covid

19.

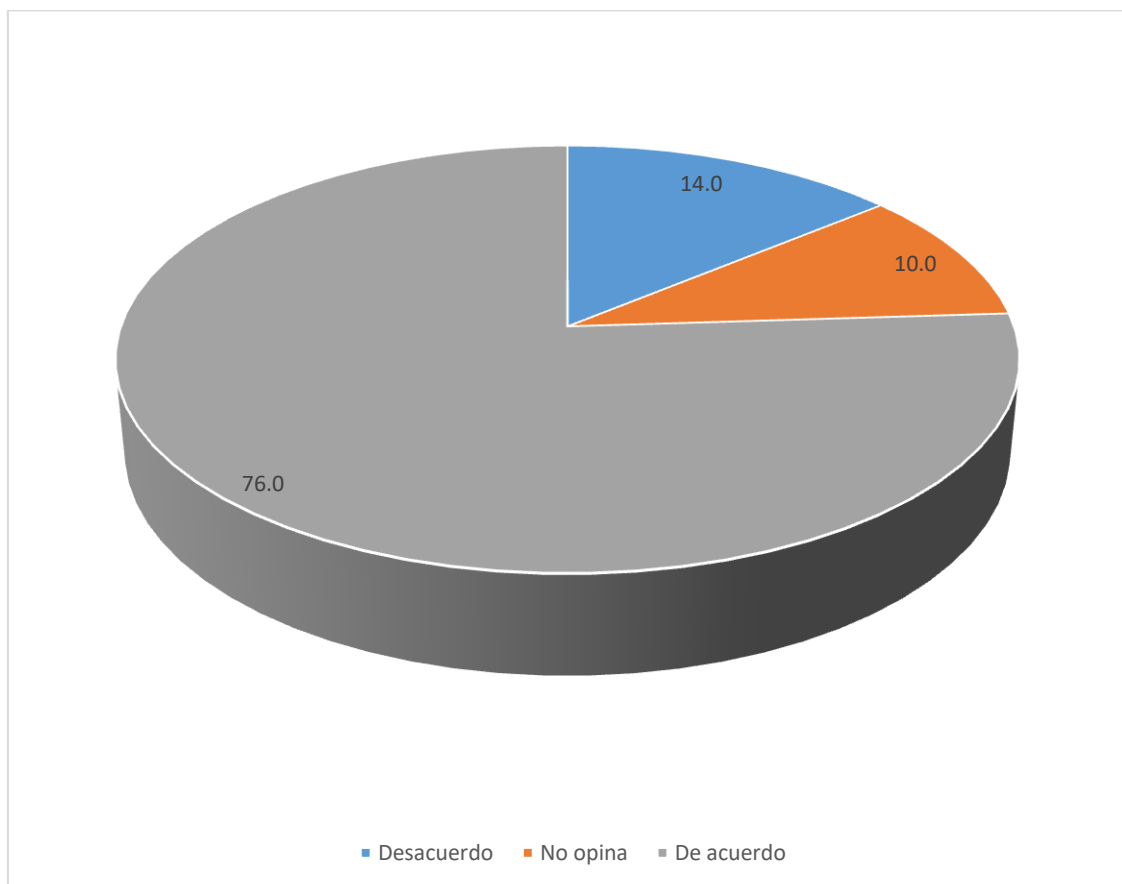


*Nota:* De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que el 56% de los especialistas en el Derecho Penal dan a conocer que están de acuerdo que, si tienen conocimiento de las nuevas implementaciones normativas propuestas por el Estado para mejorar el hacinamiento penitenciario en tiempos de Covid 19, así mismo existe un resultado favorable que expresa

estar de acuerdo con el 24% sin embargo en este resultado la población expreso no tener un amplio conocimiento de las nuevas implementaciones normativas, en caso contrario se puede establecer que existe un 12% de la población que prefieren mantenerse al margen y no expresar su opinión, por otro lado como resultado negativo se tiene al 8.0% que están en desacuerdo con las nuevas implementaciones normativas propuestas por el Estado.

**Figura 2.**

**La precariedad del sistema penitenciario peruano y sus vacíos normativos son considerados como uno de los problemas en el sistema de justicia penitenciario.**



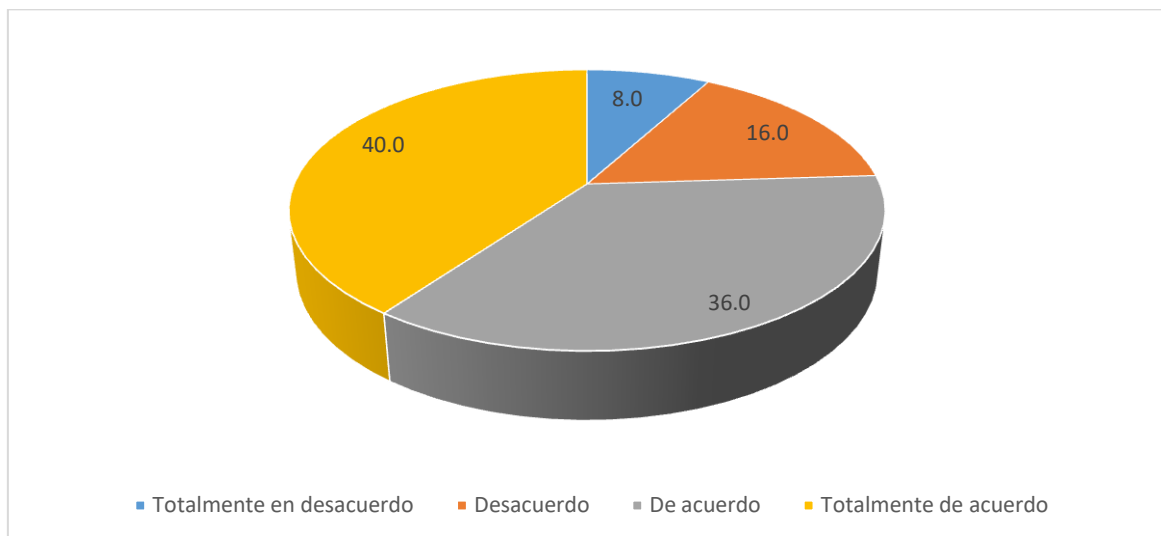
*Nota:* De acuerdo a los resultados obtenidos se puede señalar que el 76% de los especialistas en el Derecho Penal expresan estar de acuerdo en que la precariedad del sistema penitenciario peruano y sus vacíos normativos son



considerados como uno de los problemas en el sistema de justicia penitenciario, sin embargo, como resultado neutro se tiene que el 10% de los especialistas que fueron encuestados prefieren no expresar su opinión sobre la pregunta establecida, como resultado final se tiene que el 14% de la población restante establece estar en desacuerdo en la precariedad del sistema penitenciario y la existencia de vacíos normativos.

**Figura 3.**

**El Decreto Legislativo 1459 y la optimización de la aplicación de la conversión automática de la pena para personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar, a fin de reducir el hacinamiento penitenciario y evitar contagios de Covid-19**

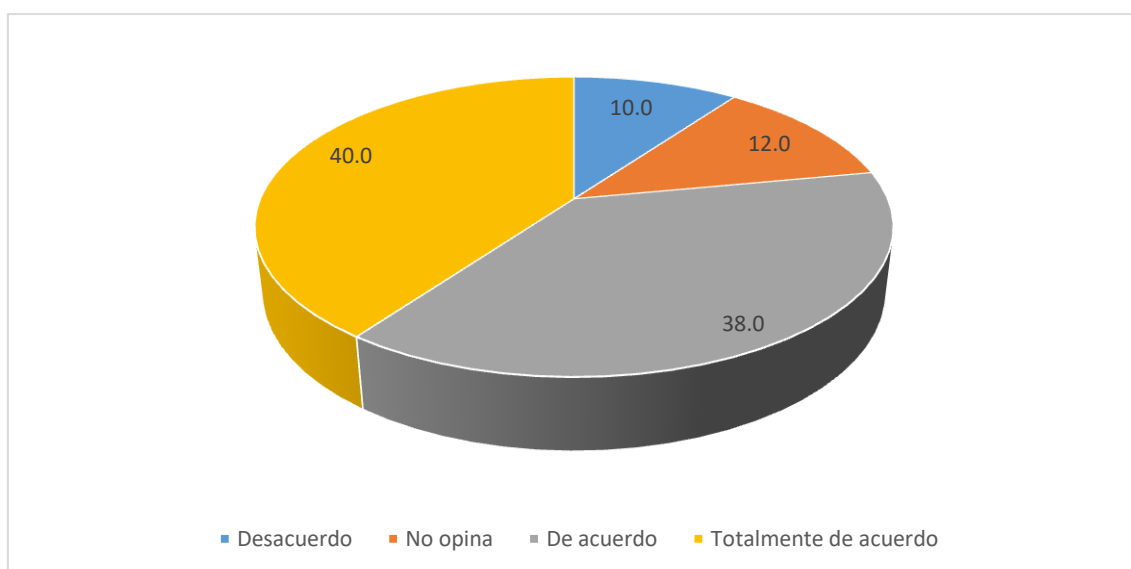


*Nota:* Conforme a los resultados obtenidos se puede señalar que el 40% de las personas que fueron encuestadas expresan estar totalmente de acuerdo en que el Decreto Legislativo N° 1459 optimiza la aplicación de la conversión automática de la pena para personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar, con el objetivo de reducir el hacinamiento penitenciario

evitando el incremento del contagio del Covid-19, de igual forma como resultado positivo se tiene al 36% de la población que expresa estar de acuerdo con la pregunta aplicada, sin embargo existen dos resultados negativos, el cual el primero es el 8.0% que expresan estar totalmente en desacuerdo y de igual forma el 16% restante están en desacuerdo en función a la aplicabilidad del Decreto Legislativo N° 1459.

**Figura 4.**

**Aplicación del D. Leg. 1459 y su cumplimiento de su rol fundamental frente a la emergencia sanitaria**

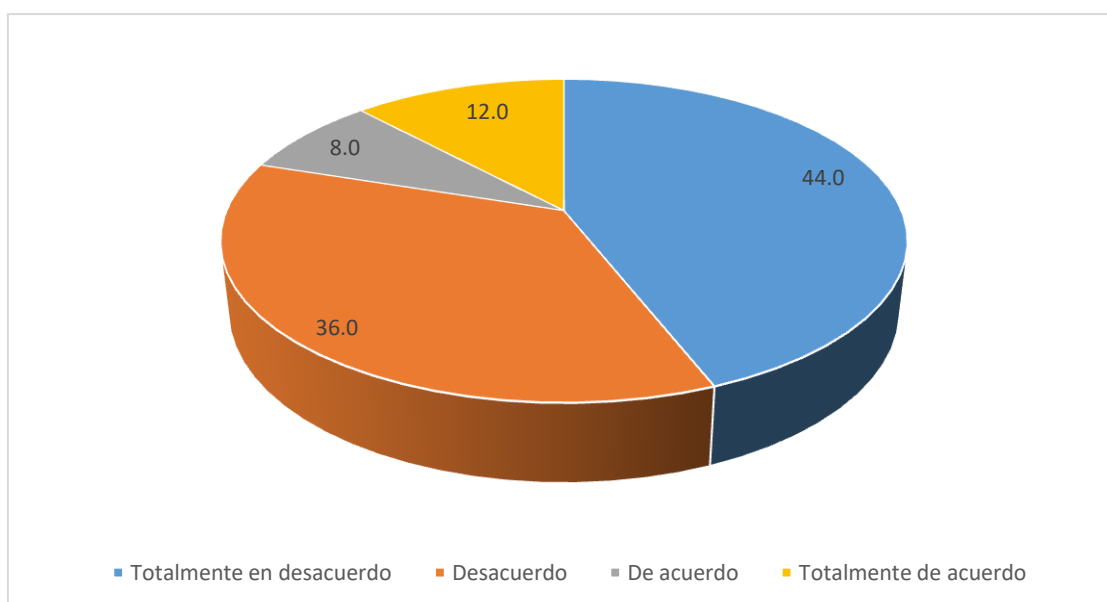


*Nota:* De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la encuesta se puede señalar que el 40% de los especialistas en el derecho penal expresan estar totalmente de acuerdo que mediante la aplicación del Decreto Legislativo N° 1459 se cumple su rol fundamental frente a la emergencia sanitaria, así mismo existe otro resultado favorable que es el 38% que expresan estar de acuerdo con la pregunta señala, sin embargo, como en toda encuesta existe

12% que prefieren no expresar su opinión sobre el tema mencionado y como último resultado obtenido se tiene al 10% de la población restante que expresan estar en desacuerdo en el cumplimiento del rol fundamental del Derecho Legislativo antes mencionado.

**Figura 5.**

**La aplicación del D. Leg. 1459, cumple con la adecuada protección al interés superior del menor.**

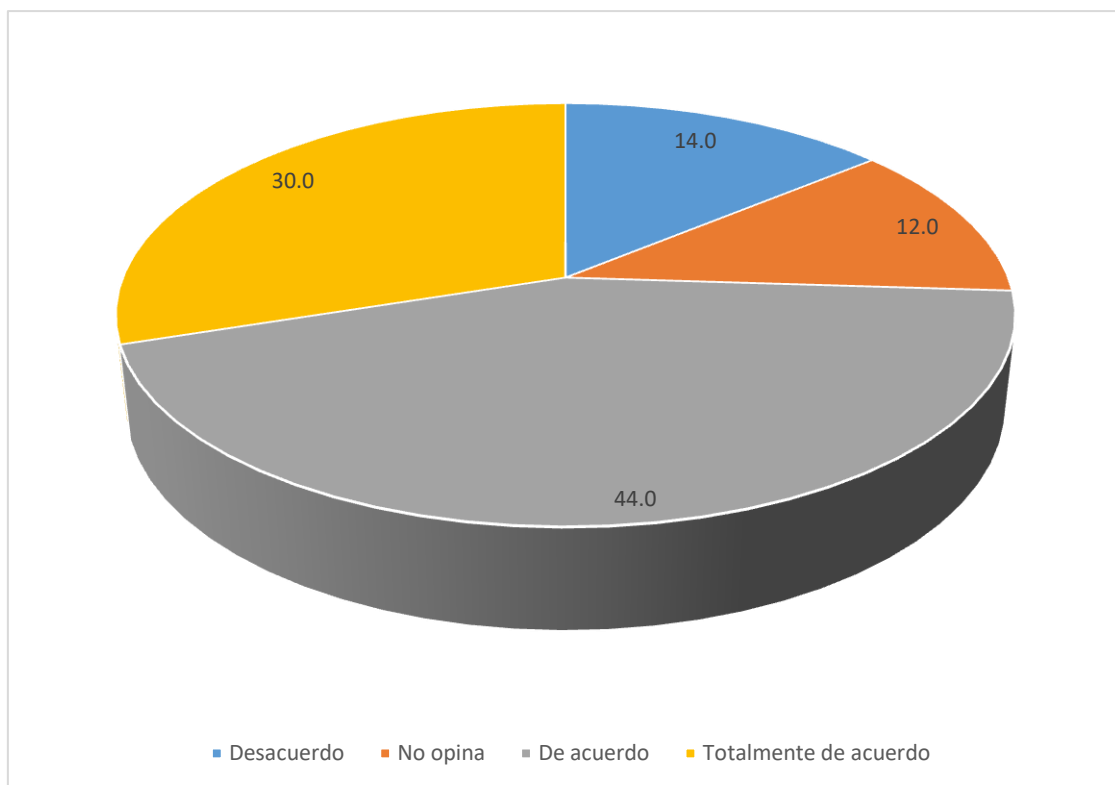


*Nota:* Conforme a los resultados obtenidos se puede señalar que el 44% de la población encuestada expresan estar totalmente en desacuerdo que mediante la aplicación del Decreto Legislativo N°1459 se cumpla con la adecuada protección del interés superior del niño, ya que esta normativa tiene gran relevancia con la omisión a la asistencia familiar, de igual forma existe un 36% de la población que expresan estar en desacuerdo, sin embargo, en caso contrario se puede señalar que un 8.0% de los encuestados expresan estar de

acuerdo y 12% restante de igual forma señalan estar totalmente de acuerdo en que la norma antes mencionada protege correctamente el interés superior del niño.

**Figura 6.**

**Función beneficiosa del D. Leg. 1459 para las personas que se encuentran privadas de su libertad por el delito de omisión a la asistencia familiar**

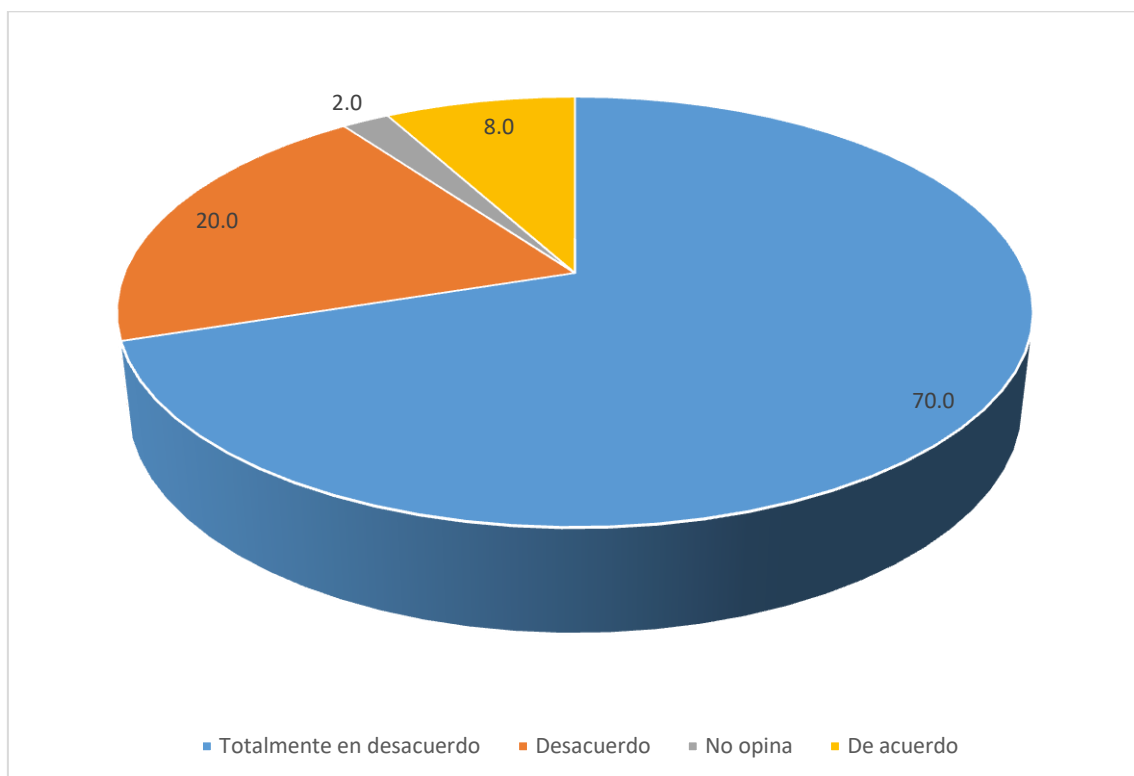


*Nota:* De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la encuesta se puede establecer que el 44% de la población expresa estar de acuerdo en el funcionamiento del Decreto Legislativo N° 1459 en beneficio de las personas

que encuentran privadas de su libertad por el delito de omisión a la asistencia familiar, de igual forma existe un 30% de los encuestados que manifiestan estar totalmente de acuerdo con la pregunta aplicada, sin embargo existe un 12% de la población que prefieren mantenerse al margen y no expresar su opinión, como último resultado se tiene al 14% de la población que manifiestan estar en desacuerdo del beneficio del Decreto Legislativo N° 1459 a las personas privadas de su libertad.

**Figura 7.**

**Aplicación del D. Leg. 1459 y el aseguramiento del pago de la pensión alimenticia al menor.**

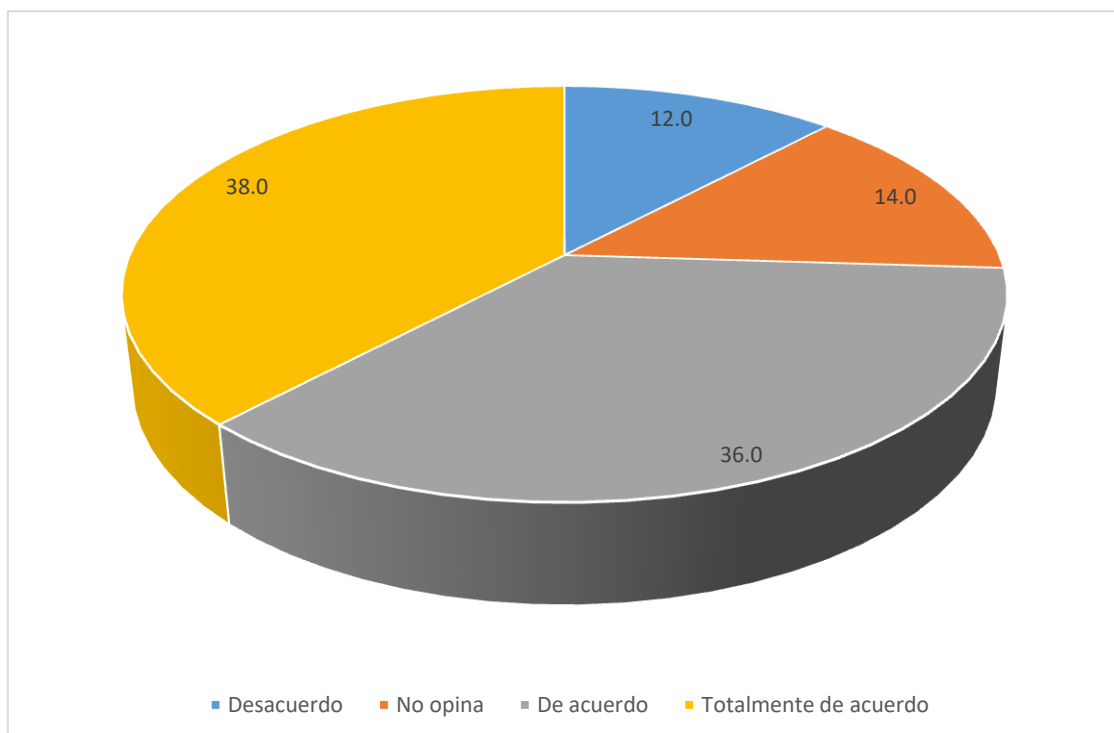


Nota: Conforme a los resultados obtenidos se puede señalar que el 70% de los encuestados expresan estar totalmente en desacuerdo que mediante la

aplicación del Decreto Legislativo 1459 se pueda asegurar el pago de las siguientes pensiones alimenticias a favor del menor, de igual forma el 20% de los encuestados expresan estar en desacuerdo en el cumplimiento de los pagos posteriores a la aplicación de la norma antes mencionada, sin embargo existe un 2.0% que prefieren no expresar su opinión y como último resultado se puede evidenciar que el 8.0% manifiestan estar de acuerdo con el pago de las pensionas alimenticias.

**Figura 8.**

**Supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de Gracias Presidenciales en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19**

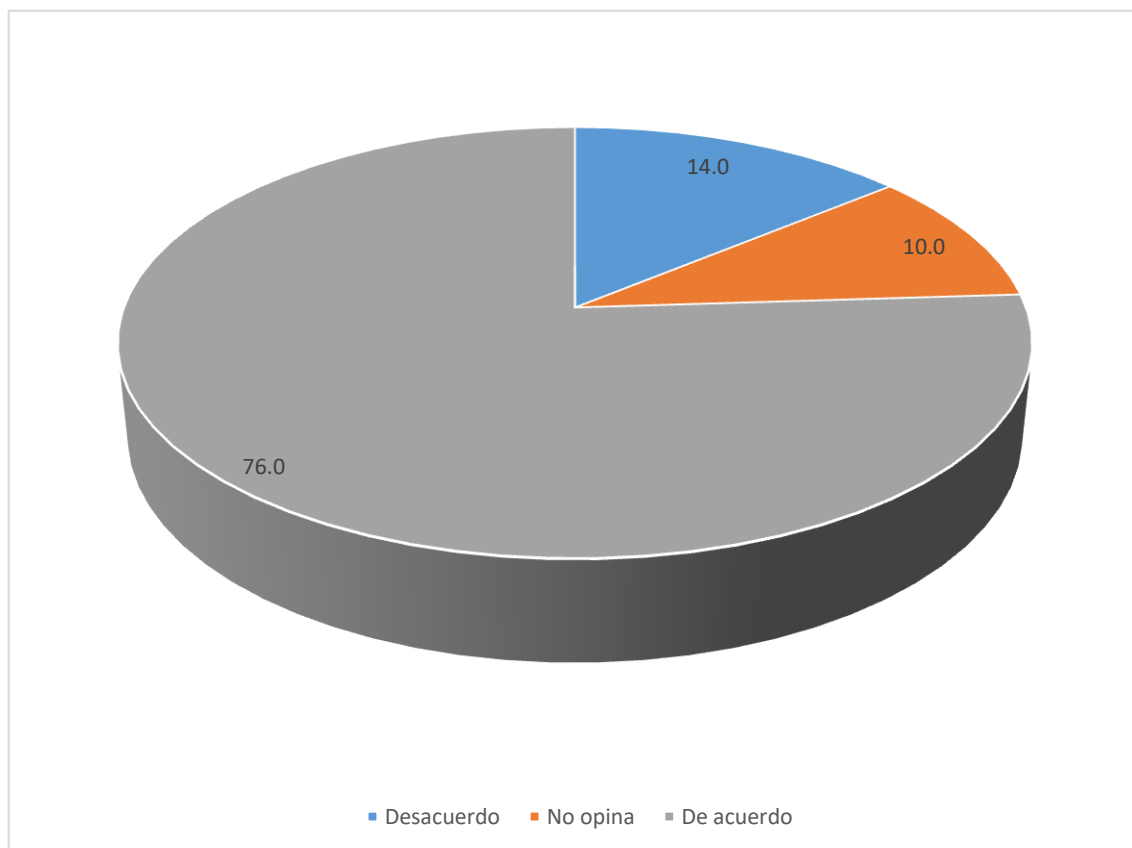


*Nota:* De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la encuesta se puede establecer que el 38% de los encuestados dan a conocer que se

encuentran totalmente de acuerdo que a través de instaurar supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de Gracias Presidenciales se podrá reducir el hacinamiento penitenciario en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, de igual forma se tiene un resultado favorable que es el 36% de la población que expresan estar de acuerdo, sin embargo existe un 14% que prefieren no opinar sobre el tema mencionado y como último resultado se tiene que el 12% de la población están en desacuerdo.

**Figura 9.**

**Implementación del Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS, se ha mejorado la**



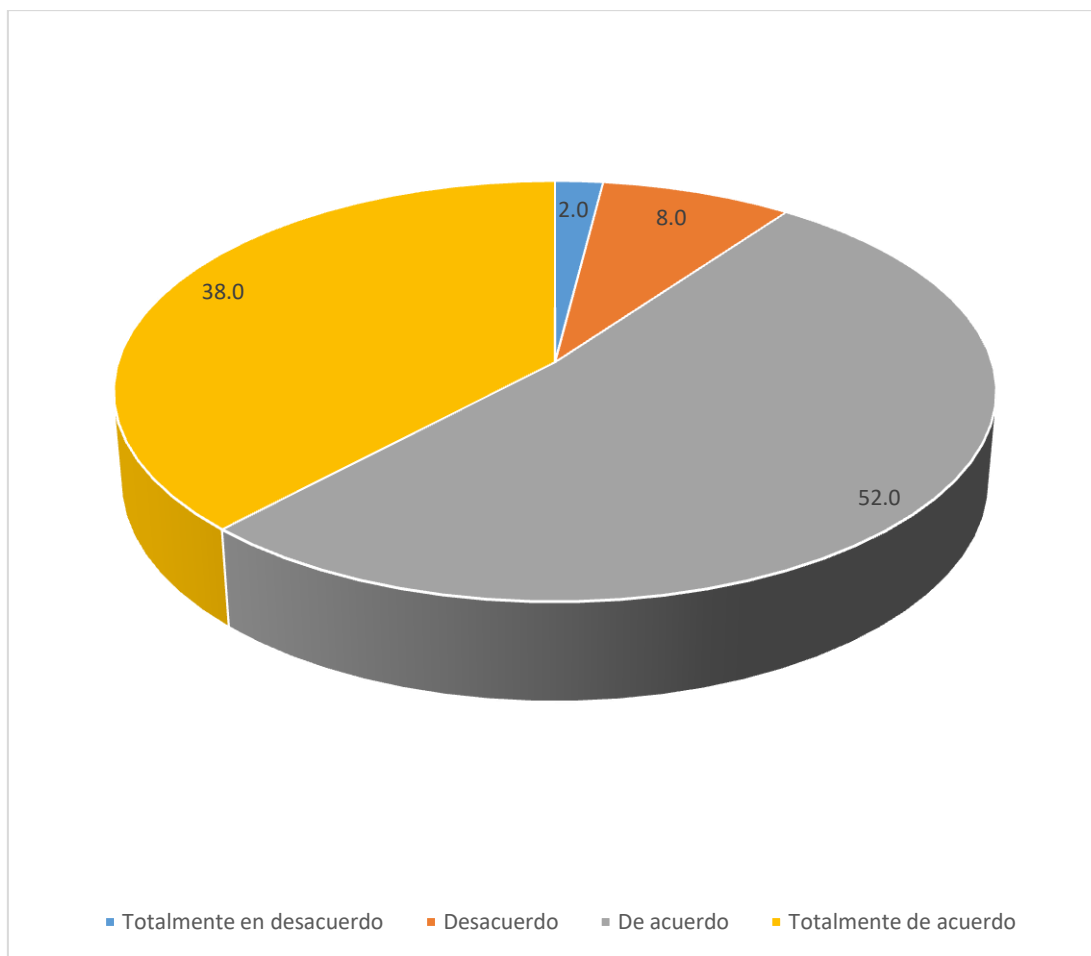
**situación penitenciaria en el Perú**

Nota: Conforme a los resultados obtenidos se puede señalar que el 76% de los especialistas en el derecho penal expresan estar de acuerdo en que si se ha mejorado la situación penitenciaria mediante la implementación del Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS, sin embargo, en caso contrario existe un 14% que están en desacuerdo en que se ha mejorado la situación penitenciaria mediante la normatividad antes mencionada y como último resultado se tiene que al 10% de los encuestados que prefiere no opinar sobre el tema.

**Figura 10.**

**Implementación de ambas normativas para disminuir el hacinamiento penitenciario en el Perú**

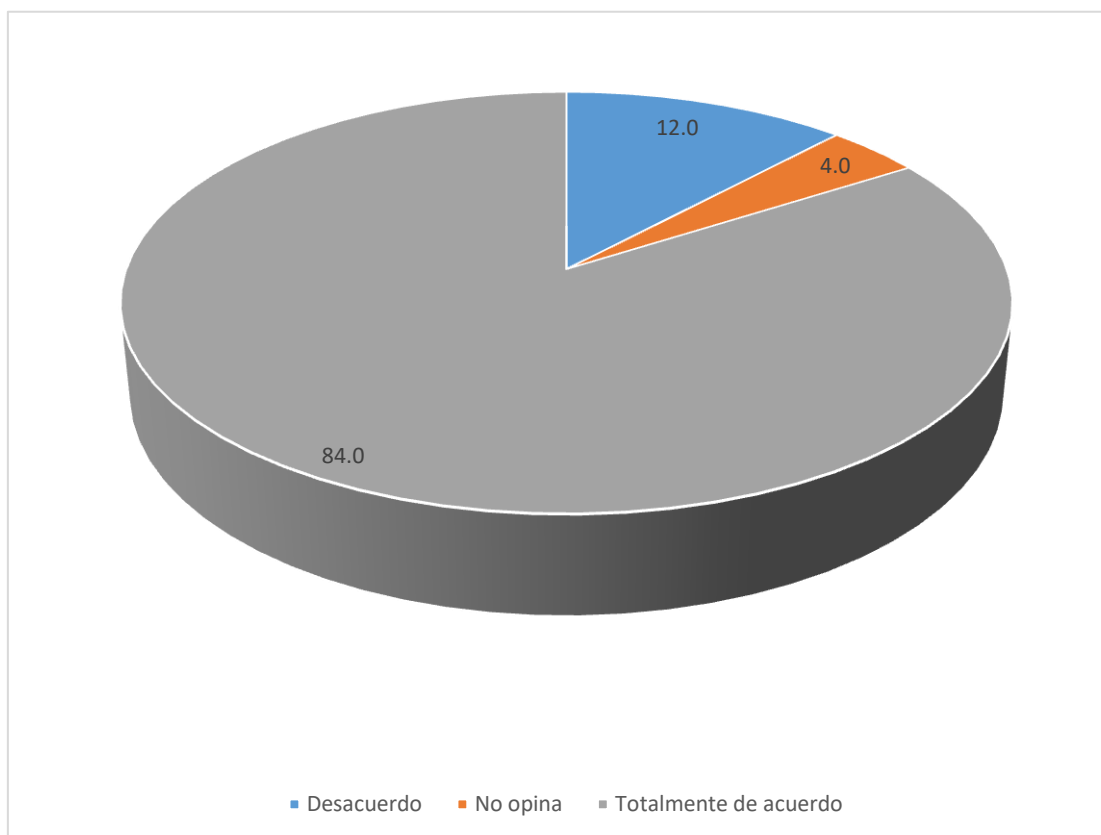




*Nota:* De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la encuesta se puede establecer que el 52% de los encuestados expresan estar de acuerdo que mediante la implementación del Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS y Decreto Legislativo 1459 se logrará disminuir el hacinamiento penitenciario en el Perú, así mismo otro resultado favorable se tiene 38% de la población que expresa estar totalmente de acuerdo con la pregunta establecida, sin embargo existe un 2.0% que manifiesta estar totalmente en desacuerdo y 8.0% restante expresa estar en desacuerdo.

**Figura 11.**

## Se podría evitar el hacinamiento penitenciario teniendo un mejor sistema

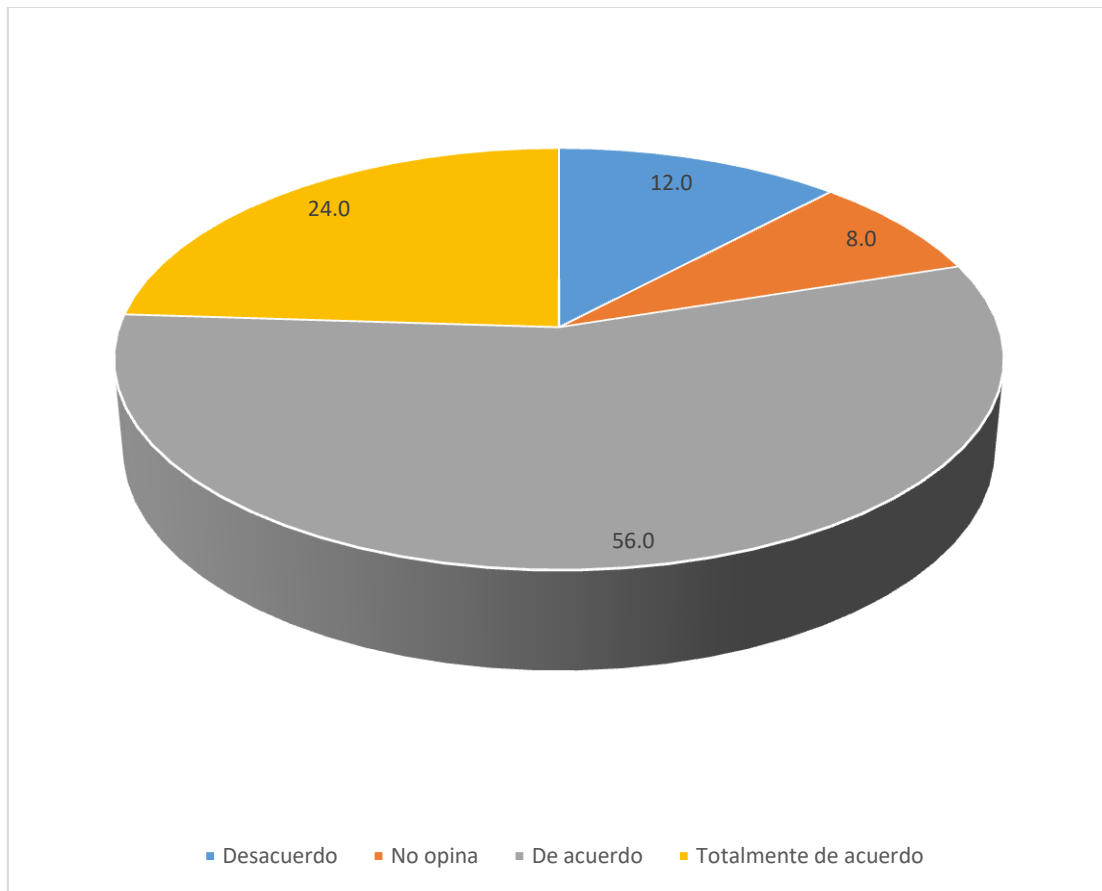


**de penas y evitando la sobre criminalización en ciertos delitos**

Nota: Conforme a los resultados obtenidos se puede señalar que el 84% de los especialistas en el Derecho Penal expresan estar totalmente de acuerdo se podrá evitar el hacinamiento penitenciario teniendo un mejor sistema de penas y evitando la sobre criminalización en ciertos delitos, en cambio existe un 4.0% de la población que prefieren no expresar su opinión sobre un nuevo sistema de penas con el objetivo de reducir el hacinamiento penitenciario, sin embargo como resultado negativo se tiene que el 12% de los encuestados expresan estar en desacuerdo con la pregunta establecida.

**Figura 12.**

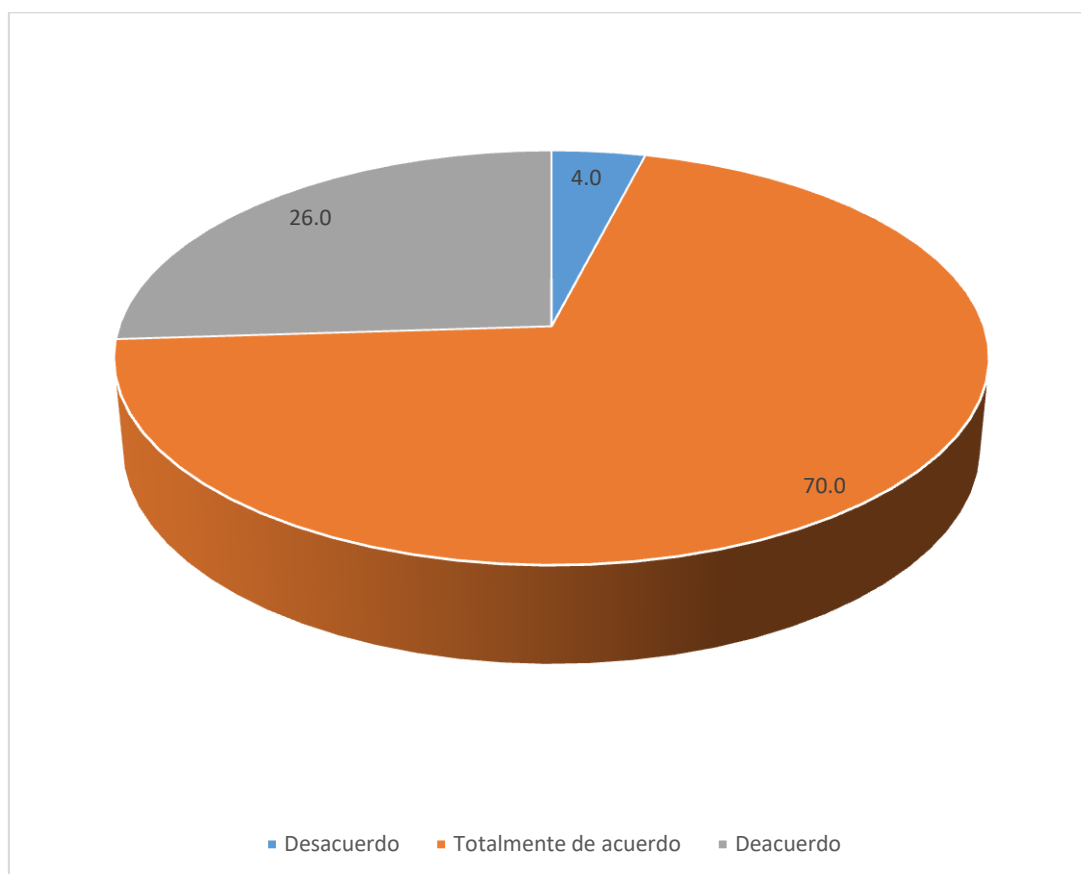
**Las implementaciones normativas se dieron con el fin de evitar vulneración de Derechos Humanos**



*Nota:* De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la encuesta se puede establecer que el 56% de los encuestados expresan estar de acuerdo que Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS y Decreto Legislativo 1459 se implementaron con el objetivo de evitar la vulneración de los derechos humanos de las personas recluidas, de igual forma se tiene un resultado favorable que es el 24% de la población que manifiesta de igual forma estar totalmente de acuerdo mediante la implementación de ambas normas, sin embargo existe un 8.0% que prefieren no opinar sobre el tema mencionado, llegando así al último resultado que es el 12% de la población que están en desacuerdo.

**Figura 13.**

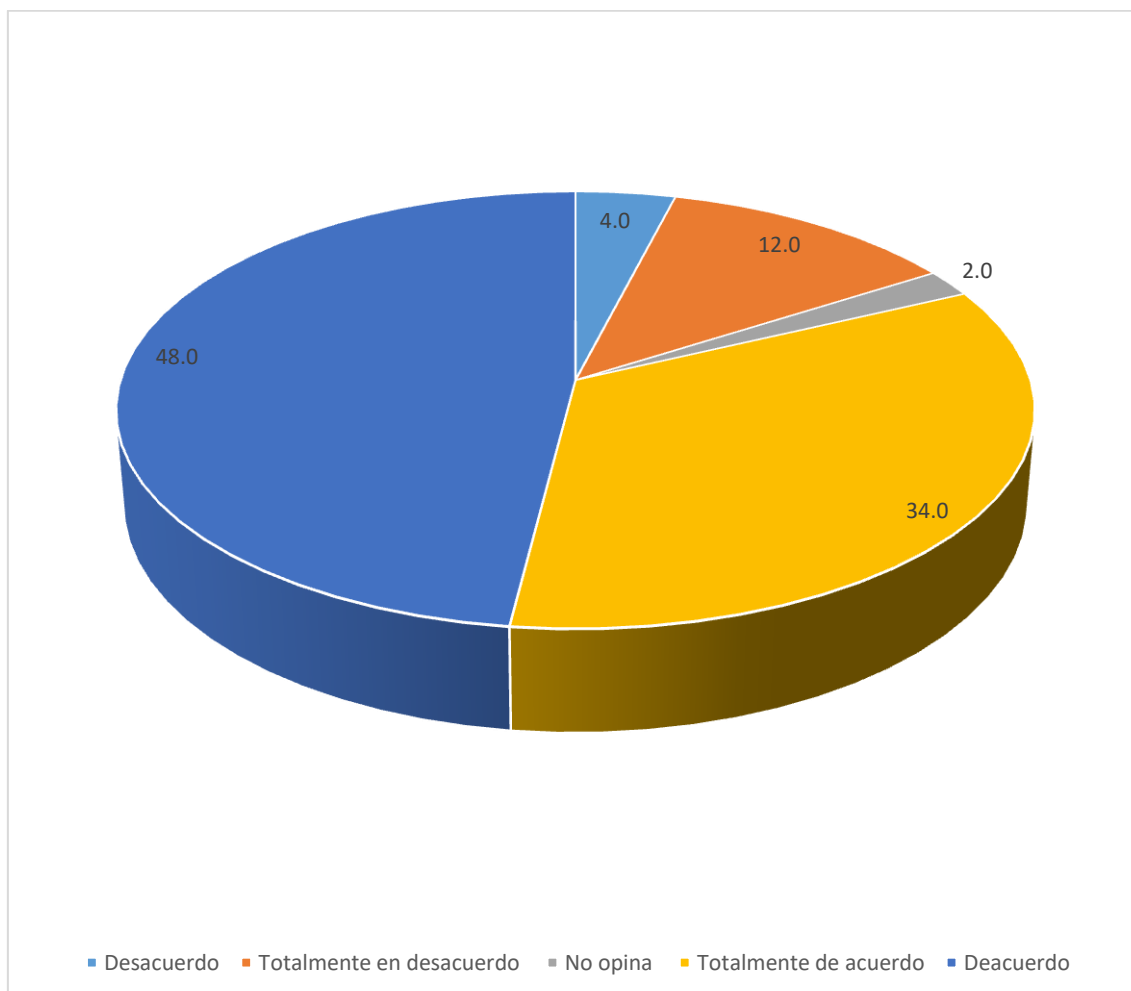
**El estado debe promover un adecuado manejo del sistema penitenciario**



Nota: Conforme a los resultados obtenidos se puede señalar que el 70% de los especialistas en el derecho penal expresan estar totalmente de acuerdo en que el estado peruano deba promover un adecuado manejo del sistema penitenciario con el objetivo de reducir el hacinamiento existente, así mismo otro resultado favorable se tiene que 26% de las personas que fueron encuestadas manifiestan estar de acuerdo, sin embargo, existe un 4.0% de la población restante que expresan estar en desacuerdo en que se deba promover un mejor manejo del hacinamiento penitenciario.

**Figura 14.**

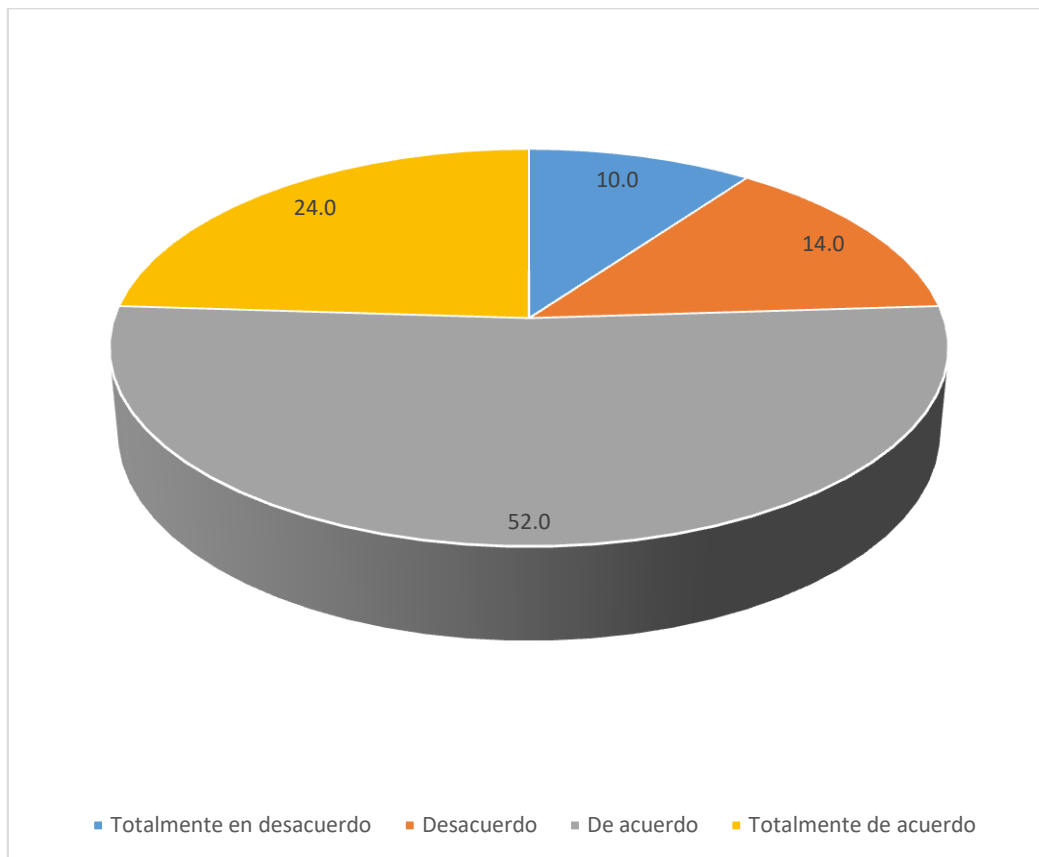
**Es necesaria la privatización del sistema penitenciario peruano**



*Nota:* De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la encuesta se puede establecer que el 48% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo en que es necesario la existencia de una privatización del sistema penitenciario del estado peruano, así mismo otro resultado relevante y favorable se tiene al 34% de la población que expresa estar totalmente de acuerdo con la pregunta aplicada, en caso contrario existe un 2.0% de los encuestados que prefieren no expresar su opinión sobre la pregunta, sin embargo un 4.0% de la población se encuentra en desacuerdo dando a entender que el 12% restante están de igual forma en total desacuerdo.

**Figura 15.**

**Estado en vez de proponer normativas, debería implementar un mejor presupuesto para evitar la sobrepoblación y hacinamiento penitenciario**



Nota: Conforme a los resultados obtenidos se puede señalar que el 52% de los especialistas en el Derecho Penal manifiestan estar de acuerdo en que estado peruano en vez de proponer normativas, debería implementar un mejor presupuesto para evitar la sobrepoblación y hacinamiento penitenciario, así mismo un resultado favorable se tiene que 24% de los encuestados expresan estar totalmente de acuerdo en que se deba aplicar un nuevo presupuesto para nuevos centros penitenciarios, sin embargo existe un 14% que expresan estar en desacuerdo y el 10% restante en total desacuerdo en que se deba aplicar un nuevo presupuesto para la elaboración de centros penitenciarios.

# **CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTEIS**

Teniendo en cuenta el objetivo general que busca determinar de qué manera Decreto Legislativo N.º 1459 y el Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS podrá disminuir el existente hacinamiento penitenciario ante la pandemia mundial del Covid-19, es por ello que al contrastarlo con lo investigado por Mateus (2020) el cual afirma que la situación del hacinamiento penitenciario no solo es un problema en el estado peruano sino que a nivel de América Latina es un problema que aún no se ha encontrado una solución viable para afrontarla, la cual se ha empeorado mediante el surgimiento del Covi-19, ocasionado amotinamientos y que se vulneren los derechos humanos de las personas que se encuentran privados de su libertad, lo cual al ser comparado con lo obtenido por la encuesta se puede señalar que el resultado de la figura N° 10 el cual señala que el 52% de los encuestados expresan estar de acuerdo que mediante la implementación del Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS y Decreto Legislativo 1459 se logrará disminuir el hacinamiento penitenciario en el Perú, así mismo otro resultado favorable se tiene 38% de la población que expresa estar totalmente de acuerdo con la pregunta establecida, sin embargo existe un 2.0% que manifiesta estar totalmente en desacuerdo y 8.0% restante expresa estar en desacuerdo. Mediante la constatación de los resultados obtenidos y lo sustentado por el autor Mateus, se puede dar a conocer que ambos decretos ayudan eficazmente en la reducción del hacinamiento penitenciario que se viven en los centros de reclusión del estado peruano, sin embargo, no es el único objetivo ya que cabe resaltar que mediante estas normatividades se puede mejorar la protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran reclusas.



Continuando con el análisis de resultados se tiene en cuenta el primer objetivo específico el cual hace referencia al análisis de la situación actual de los establecimientos penitenciarios y sus actuaciones realizadas frente a la pandemia del Covid-19, el cual al contrastarlo con lo sustentado por Rubio (2020), el cual da a conocer que a través del surgimiento del Covid-19 los centros penitenciarios del estado peruano han ocasionado conflictos desde las parte administrativa hasta la situación de convivencia de las personas reclusas, cabe resaltar que mediante el Decreto Legislativo N.º 1459 y DS. 004-2020 se ha logrado facilitar el otorgamiento de beneficios penitenciarios. Al compararlo con el resultado obtenido en la figura N° 11 el cual señala que el 84% de los especialistas en el Derecho Penal expresan estar totalmente de acuerdo se podrá evitar el hacinamiento penitenciario teniendo un mejor sistema de penas y evitando la sobre criminalización en ciertos delitos, en cambio existe un 4.0% de la población que prefieren no expresar su opinión sobre un nuevo sistema de penas con el objetivo de reducir el hacinamiento penitenciario, sin embargo como resultado negativo se tiene que el 12% de los encuestados expresan estar en desacuerdo con la pregunta establecida. Teniendo en cuenta lo investigado por el autor Rubio y lo obtenido por la aplicación de la encuesta en la figura 11 se puede dar a conocer que la situación de los centros penitenciarios a nivel nacional es considerada un caos por el tan solo hecho del hacinamiento existente el cual genera que se vulnere los derechos humanos de las personas reclusas, sin embargo el estado peruano ha generado normas con el objetivo de disminuir la población existente y poder proteger correctamente los derechos de los reclusos.

Prosiguiendo con el segundo objetivo específico el cual hace referencia a Identificar la aplicabilidad del Decreto Legislativo N.º 1459 y el Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS frente a la situación actual de los centros penitenciarios, el cual al contrastarlo con lo investigado por Mollehuanca y Santamaria (2019) el cual señala que las políticas o normas del estado peruano ha contribuido de manera minima a la reducción del hacinamiento penitenciario, ocasionándose así que su finalidad penal no cumpla con su objetivo y la resocialización de las personas que se encuentra reclusas. En cambio, al compararlo con el resultado obtenido en la figura N° 12 la cual señala que el 56% de los encuestados expresan estar de acuerdo que Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS y Decreto Legislativo 1459 se implementaron con el objetivo de evitar la vulneración de los derechos humanos de las personas reclusas, de igual forma se tiene un resultado favorable que es el 24% de la población que manifiesta de igual forma estar totalmente de acuerdo mediante la implementación de ambas normas, sin embargo existe un 8.0% que prefieren no opinar sobre el tema mencionado, llegando así al último resultado que es el 12% de la población que están en desacuerdo. Mediante lo sustentado por los autores Mollehuanca y Santamaria y lo obtenido por la figura N° 12 se puede evidenciar una clara diferencia de resultados ya que los autores consideran que las normas que ha venido implementado el estado peruano no cumplen con su finalidad que es la reducción del hacinamiento penitenciario y la correcta resocialización de las personas reclusas, sin embargo, mediante los resultados obtenido se puede evidenciar un claro favorecimiento hacia el Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS y Decreto Legislativo 1459, ya que han sido considerado mecanismos alternativos frente a la situación actual del Covid-19 y

el hacinamiento penitenciario por el tan solo hecho de ser considerado una alternativa viable para la protección de la vida humana frente a las personas que están reclusas por la omisión a la asistencia familiar.

Para finalizar tendremos en cuenta el último objetivo específico, el cual busca examinar las consecuencias jurídicas del Decreto Legislativo N.º 1459 y el Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS, el cual al contrastarlo con lo investigado por Chaiña (2014), el cual da a conocer que la realidad penitenciaria de del centro penitenciario de Challapalca es considerada un caos determinándose de tal manera servicio de salud penitenciaria soslaya el derecho a la salud de los internos, ya que se ha logrado evidenciar que los centros penitenciarios no cuenta con áreas correspondientes para el cuidado y bienestar de los reclusos, tomando en cuenta que estas áreas que antes era designadas para cierto labores han sido utilizadas como dormitorios para el ingreso de nuevos reclusos generando así el hacinamiento penitenciario. Al compararse a la situación actual es de vital importancia analizar lo obtenido en la N° 7 la cual señala que el 70% de los encuestados expresan estar totalmente en desacuerdo que mediante la aplicación del Decreto Legislativo 1459 se pueda asegurar el pago de las siguientes pensiones alimenticias a favor del menor, de igual forma el 20% de los encuestados expresan estar en desacuerdo en el cumplimiento de los pagos posteriores a la aplicación de la norma antes mencionada, sin embargo existe un 2.0% que prefieren no expresar su opinión y como último resultado se puede evidenciar que el 8.0% manifiestan estar de acuerdo con el pago de las pensiones alimenticias. Es fundamental dar a conocer que el Decreto Legislativo 1459 y Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS busca disminuir el hacinamiento penitenciario sin embargo no toman en cuenta

lo que ambos decretos pueden ocasionar, lo cual uno de los principales problemas es que no se pueda asegurar los pagos correspondientes a la pensión alimenticia después de aplicada el decreto legislativo, generando así una vulneración del interés superior del niño.

# **CAPITULO IV:CONCLUSIONES**

## CONCLUSIONES

1. Se puede determinar que mediante la aplicación del Decreto Legislativo N.º 1459 y el Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS, los cuales han sido dados durante la situación del Covid-19, se ha logrado disminuir el hacinamiento penitenciario frente a la actual situación del Covid-19 a través de nuevas medidas de cesación de prisión en donde los delitos de mínima lesividad obtuvieron beneficios que favorecieron la condición del recluso, obteniendo así su libertad inmediata a través del cumplimiento de determinados parámetros establecidos.
2. En función a la situación actual de los establecimientos penitenciarios se analiza que frente a la pandemia COVID- 19, las cárceles peruanas han presentado medidas en donde se apliquen mecanismos por parte del Estado peruano para mejorar el bienestar de las personas reclusas, en donde se priorice el respeto de derechos fundamentales y la reducción del hacinamiento penitenciario.
3. Dentro de la legislación peruana se ha identificado que la urgente aplicación del Decreto Legislativo N.º 1459 y el Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS son producto de la ausencia de medidas necesarias por parte del Estado que contribuyan a mejorar la estabilidad de los establecimientos penitenciarios en relación al hacinamiento penitenciario.

4. Mediante el Decreto Legislativo N.º 1459 y el Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS se ha logrado examinar que existen consecuencias jurídicas, como puede ser la falta de una adecuada resocialización de las personas reclusas debido a las condiciones en las que viven; por otra parte, la vulneración del interés superior del niño al no generar una adecuada posibilidad de posibles pagos de la pensión alimenticia.

## **CAPITULO VI: RECOMENDACIONES**



## RECOMENDACIONES

1. De acuerdo a la aplicación del Decreto Legislativo N.º 1459 y el Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS, se recomienda que establezcas parámetros adecuados con el fin de aplicar una buena resocialización de las personas reclusas y se pueda garantizar los pagos futuros de las pensiones alimenticias a favor del interés superior del niño.
2. El estado debe regularizar la vigencia y aplicación del DL 1459 y DS 004-2020 de manera indeterminada y no únicamente durante el estado de emergencia; a fin de no solo coadyuvar a un control de salubridad durante la pandemia sino a la búsqueda del deshacinamiento penitenciario a fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales de la población penitenciaria.
3. Se debe mejorar el sistema que regula las penas a las personas que cometen actos ilícitos con el fin de evitar una criminalización excesiva, el cual ayudara a disminuir el hacinamiento penitenciario del estado nacional.
4. El Estado peruano; debe implementar nuevas medidas a fin de contribuir a una adecuada resocialización penitenciaria; estableciendo nuevos D.L relacionados a la optimización y celeridad de las conversiones de penas en delitos de mínima lesividad.

## REFERENCIAS

- Álvarez, M. (2008). La ejecución de la pena, un acercamiento desde el Derecho Penal mínimo, Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Bergalli, R. (1992). ¡Esta es la cárcel que tenemos... (pero no queremos) !, Barcelona: Bosch.
- Bueno, F. (2005). La ciencia del Derecho Penal: un modelo de inseguridad jurídica, Madrid: Civitas
- Cárcamo, E. (2015). Asociaciones público-privadas en el sistema penitenciario. Una alternativa de solución para la inseguridad en el Perú, 1.a ed., Lima: Esan.
- Cárcamo, E. (2015). Asociaciones público-privadas en el sistema penitenciario, revista Esan. recuperado de: [https://www.esan.edu.pe/publicaciones/2015/12/07/libro\\_app\\_sistema\\_penitenciario\\_solucion\\_inseguridad.pdf](https://www.esan.edu.pe/publicaciones/2015/12/07/libro_app_sistema_penitenciario_solucion_inseguridad.pdf)
- Carpintero, H. (2005). Historia de las ideas psicológicas, 2.<sup>a</sup> ed., Madrid: Pirámide.
- Carranza, E. (2012). Situación penitenciaria en América Latina y el Caribe ¿Qué hacer?, Revista Derechos Humanos, recuperado de: [file:///C:/Users/USER/Downloads/20551-1-63566-1-10-20120709%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/20551-1-63566-1-10-20120709%20(1).pdf)
- Carranza, E. (2016). Situación penitenciaria en América Latina y el Caribe ¿Qué hacer?, Espacio Jurídico, Colombia.
- Caruajulca, A. (2018). Defensoría del Pueblo: Penales tienen una sobrepoblación del 130 %", en Diario Correo, Lima
- Cervelló, V. (2001). Derecho penitenciario, 1.a ed., Valencia: Tirant Lo Blanch.

- Chaiña, H. (2014). Realidad penitenciaria y derechos humanos de los internos del penal De Challapalca, Tacna 2011, Universidad Nacional del Altiplano, recuperado de:  
[http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/1920/Chai%C3%B1a\\_Lopez\\_Henry\\_German.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/1920/Chai%C3%B1a_Lopez_Henry_German.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Comité Internacional de la Cruz Roja, (2013). Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles. Guía complementaria, Ginebra
- Cuba, E. (2017). Reinserción social de los internos en los centros penitenciarios del Estado peruano, tesis para optar el grado académico de doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad, Lima: Universidad César Vallejo.
- García, C. (1997). Del presidio a la prisión modular, 1.a ed., Madrid: Opera Prima
- Hernández, N (2019). El Derecho Penal de la cárcel. Una mirada al contexto colombiano con base en el giro punitivo y la tendencia al mayor encarcelamiento, en Estudios Socio-Jurídicos, vol. 21, n.º 2, Bogotá
- Instituto Nacional Penitenciario (2020). Informe estadístico. Febrero-2020, Lima.
- Juliano, M. (2012). Contra la prisión perpetua. Una versión histórica y comparada de las penas a perpetuidad, Buenos Aires: Editores del Puerto
- La Ley (2020). Ministro de Justicia: 645 internos infectados y 30 fallecidos por COVID-19, La Ley, Lima.
- López, A. (2004). Análisis del régimen de ejecución penal, Buenos Aires: Fabian Di Placido.
- López, J. (2006). Derecho Penal. Parte general. Las consecuencias jurídicas del delito. El Derecho Penal de ejecución, t. iv, Madrid: Marcial Pons.

- Mateus, D. (2020). Hacinamiento carcelario y covid-19 en américa latina, revista jurídica paz y seguridad, Recuperado de: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/16288.pdf>
- Miñano, E. y Barrueto, R. (2020), Peligro de grandes brotes de COVID-19 en la población penitenciaria peruana, Revista Rev Esp Sanid Penit, recuperado de: [http://scielo.isciii.es/pdf/sanipe/v22n2/es\\_2013-6463-sanipe-22-02-91.pdf](http://scielo.isciii.es/pdf/sanipe/v22n2/es_2013-6463-sanipe-22-02-91.pdf)
- Mollehuanca, R. y Santamaria, E. (2019). Hacinamiento carcelario y políticas de tratamiento penitenciario de los reclusos en Lima, Universidad Autónoma, recuperado de: <http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/AUTONOMA/663/1/MOLLEHUANCA%20BALCONA%20Y%20SANTAMARIA%20PACHAS.pdf>
- Nahle, N. (2003). Sobrepoblación Humana, en Biología Cabinet, San Nicolás de los Garza.
- Osses, C. (2013). Situación de Salud de reclusos de un Centro de Cumplimiento Penitenciario, Chile, revista Esp Sanid Penit, recuperado de [http://scielo.isciii.es/pdf/sanipe/v15n3/03\\_original2.pdf](http://scielo.isciii.es/pdf/sanipe/v15n3/03_original2.pdf)
- Pastor, E. (2017). El sistema penitenciario y las personas privadas de libertad en España desde una perspectiva internacional, en la revista Conicyt, recuperado de [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-33992017000100005](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992017000100005)
- Rivera, I. (2006). La cuestión carcelaria. Historia, epistemología, derecho y política penitenciaria, Buenos Aires: Ediciones del Puerto

- Rodríguez, M. (2015). Hacinamiento penitenciario en América Latina: causas y estrategias para su reducción, México D. F.: Comisión Nacional de Derechos Humanos
- Roxin, C. (2001). Transformaciones de la teoría de los fines de la pena”, en AA.VV., Nuevas formulaciones de las ciencias penales. Homenaje a Claus Roxin, Córdoba: Marcos Lerner
- Rubio, C. (2020). Problemas y desafíos de las cárceles frente al COVID-19 en el Perú, en La Ley, Lima.
- Rubio, C. (2020). Problemas y desafíos de las cárceles frente al COVID-19 en el Perú, en la revista La Ley, recuperado de: <https://laley.pe/art/9579/problemas-y-desafios-de-las-carceles-frente-al-covid-19-en-el-peru>
- Sferlazza, O. (2005). Proceso acusatorio oral y delincuencia organizada, México D.F.: Fontamara
- Solís, A. (2008). Política penal y política penitenciaria”, en Cuaderno de Trabajo, n.º 8, Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú



# ANEXOS



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

## ANÁLISIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N.º 1459 Y DEL DECRETO SUPREMO N.º 004-2020-JUS EN FUNCIÓN A LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PERUANA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, CHICLAYO 2020

Estimado (a): Se le solicita su valiosa colaboración para que marque con un aspa el casillero que crea conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional, puesto que, mediante esta técnica de recolección de datos, se podrá obtener la información que posteriormente será analizada e incorporada a la investigación con el título descrito líneas arriba.

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde:

1	2	3	4	5
TOTALMENTE EN DESACUERDO	EN DESACUERDO	NO OPINA	DE ACUERDO	TOTALMENTE DE ACUERDO

ITEM	TD	D	NO	A	TA
1. ¿Conoce usted acerca de las implementaciones normativas propuestas por el Estado para mejorar el hacinamiento penitenciario en tiempos de Covid 19?					
2. ¿Considera usted que uno de los problemas en el sistema de justicia e implementación de penas es la precariedad del sistema penitenciario peruano y sus vacíos normativos?					
3. ¿Cree usted que el Decreto Legislativo 1459, optimiza la aplicación de la conversión automática de la pena para personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar, a fin de reducir el hacinamiento penitenciario y evitar contagios de Covid-19?					
4.- ¿Cree que la aplicación del D. Leg. 1459 y su cumplimiento de su rol fundamental frente a la emergencia sanitaria?					
5.- ¿Considera que la aplicación del D. Leg. 1459, Cumple con la adecuada protección al interés superior del menor?					

6. ¿Considera usted que el D. Leg. 1459 ha sido beneficioso para las personas que se encuentran privadas de su libertad por el delito de omisión a la asistencia familiar?					
7. ¿Cree usted que se asegurara el pago de la pensión alimenticia al menor posterior a la aplicación del D. Leg. 1459?					
8. ¿Considera usted que es necesario establecer supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de Gracias Presidenciales en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19?					
9. ¿Cree usted que con la implementación del Decreto Supremo N. ° 004-2020-JUS, se ha mejorado la situación penitenciaria en el Perú?					
10. ¿Considera usted que fue necesaria la implementación de ambas normativas para disminuir el hacinamiento penitenciario en el Perú?					
11. ¿Cree usted el hacinamiento penitenciario se podría evitar teniendo un mejor sistema de penas y evitando la sobre criminalización en ciertos delitos?					
12. ¿Considera usted las implementaciones normativas se dieron con el fin de evitar vulneración de Derechos Humanos?					
13. ¿Cree usted que el estado deba promover un adecuado manejo del sistema penitenciario?					
14. ¿Considera usted que es necesaria la privatización del sistema penitenciario peruano?					
15. ¿Cree usted que el Estado en vez de proponer normativas, debería implementar un mejor presupuesto para evitar la sobrepoblación y hacinamiento penitenciario?					



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA**  
**UNIDAD DE INVESTIGACION**



**ACTA DE SUSTENTACIÓN**  
**A C T A DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL N° 43-2022-UI-FDCP**

Sustentación para optar el Título de ABOGADA de: **Juliana Pamela Gastelo Villena**.  
Siendo las 11:00 a.m. del día miércoles 17 de agosto del 2022 se reunieron vía Plataforma Virtual MEET de Google Suite de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: **"ANÁLISIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1459 Y DEL DECRETO SUPREMO N° 004-2020-JUS EN FUNCIÓN A LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PERUANA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, CHICLAYO 2020"**, designados por Decreto N° 80-2021-FDCP-VIRTUAL de fecha 30 de abril del 2021, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

**PRESIDENTE** : Abog. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**.  
**SECRETARIO** : Dr. **AMADOR NICOLÁS MONDOÑEDO VALLE**.  
**VOCAL** : Mag. **CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA**

La tesis fue asesorada por Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ, nombrada por Decreto N°80-2021-FDCP-VIRTUAL de fecha 30 de abril del 2021.

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°185-2022-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG de fecha 22 de julio del 2022.


La tesis fue presentada y sustentada por la bachiller **Juliana Pamela Gastelo Villena** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: **APROBADA con la nota de 17.66 (Diecisiete y 00/66) en la escala vigesimal, mención de BUENO.**

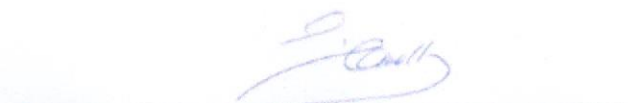
**Por lo que queda APTA** para obtener el Título Profesional de **ABOGADA**, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 11:58 a.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado el Acta; quedando registrado el video en el link:  
<https://drive.google.com/file/d/1clWj2ZqdexkfFEy6ehN4297jIJNvb1KL/view?usp=sharing>

Lambayeque, miércoles 17 de agosto del 2022

  
Abog. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**  
Presidente del Jurado

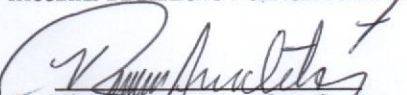
  
Dr. **AMADOR NICOLÁS MONDOÑEDO VALLE**  
Secretario del Jurado

  
Mag. **CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA**  
Vocal del Jurado.

**Certificación:** El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, certifica la veracidad del contenido del Acta de sustentación de tesis Virtual N° 43-2022-UI-FDCP correspondiente a Juliana Pamela Gastelo Villena, evento que se ha realizado de manera virtual el día miércoles 17 de agosto del 2022 y aparece registrada en el archivo correspondiente.

Lambayeque, 26 de agosto del 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA

  
Dr. **Víctor Ruperto Anacleto Guerrero**  
Director De La Unidad De Investigación



## CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ, Asesor de Tesis de Bach. Juliana Pamela Gastelo Villena, titulada “ANÁLISIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N.º 1459 Y DEL DECRETO SUPREMO N.º 004-2020-JUS EN FUNCIÓN A LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PERUANA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, CHICLAYO 2020”, luego de la revisión exhaustiva del documento, constato que la misma tiene un índice de similitud de 16% (DIECISEIS %) verificable en el reporte de similitud del programa TURNITIN.

El suscrito analizo dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 30 de mayo del 2022



---

**Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ**  
**D.N.I. 16484422**  
**ASESOR**

# ANÁLISIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N.º 1459 Y DEL DECRETO SUPREMO N.º 004-2020-JUS EN FUNCIÓN A LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PERUANA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, CHICLAYO 20

## INFORME DE ORIGINALIDAD

16%

INDICE DE SIMILITUD

16%

FUENTES DE INTERNET

2%

PUBLICACIONES

5%

TRABAJOS DEL  
ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

1

[repositorio.uss.edu.pe](https://repositorio.uss.edu.pe)

Fuente de Internet

6%

2

[hdl.handle.net](https://hdl.handle.net)

Fuente de Internet

1%

3

Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Trabajo del estudiante

1%

4

[vsip.info](https://vsip.info)

Fuente de Internet

1%

5

[influenciatecnologiacpm.blogspot.com](https://influenciatecnologiacpm.blogspot.com)

Fuente de Internet

<1%

6

[idoc.pub](https://idoc.pub)

Fuente de Internet

<1%

7

[repositorio.ucv.edu.pe](https://repositorio.ucv.edu.pe)

Fuente de Internet

<1%

Submitted to Universidad Cesar Vallejo

8

Trabajo del estudiante

&lt;1 %

9

[repositorio.uprit.edu.pe](https://repositorio.uprit.edu.pe)

Fuente de Internet

&lt;1 %

10

[www.enfoquederecho.com](http://www.enfoquederecho.com)

Fuente de Internet

&lt;1 %

11

[redpav-fpolar.info.ve](http://redpav-fpolar.info.ve)

Fuente de Internet

&lt;1 %

12

[repositorio.untumbes.edu.pe](https://repositorio.untumbes.edu.pe)

Fuente de Internet

&lt;1 %

13

[spijweb.minjus.gob.pe](http://spijweb.minjus.gob.pe)

Fuente de Internet

&lt;1 %

14

[summa.cejil.org](http://summa.cejil.org)

Fuente de Internet

&lt;1 %

15

[repositorio.udh.edu.pe](https://repositorio.udh.edu.pe)

Fuente de Internet

&lt;1 %

16

[www.mazars.pe](http://www.mazars.pe)

Fuente de Internet

&lt;1 %

17

[1library.co](http://1library.co)

Fuente de Internet

&lt;1 %

18

Submitted to Universidad Católica de Santa  
María

Trabajo del estudiante

&lt;1 %

19

[www.elperulegal.com](http://www.elperulegal.com)

Fuente de Internet

<1 %

20

[www.dateas.com](http://www.dateas.com)

Fuente de Internet

<1 %

21

[cdn.www.gob.pe](http://cdn.www.gob.pe)

Fuente de Internet

<1 %

22

[repositorio.unheval.edu.pe](http://repositorio.unheval.edu.pe)

Fuente de Internet

<1 %

23

Submitted to Universidad Tecnologica del Peru

Trabajo del estudiante

<1 %

24

[dspace.pucesi.edu.ec](http://dspace.pucesi.edu.ec)

Fuente de Internet

<1 %

25

[ius360.com](http://ius360.com)

Fuente de Internet

<1 %

26

Submitted to Universidad Peruana Los Andes

Trabajo del estudiante

<1 %

27

[irp-cdn.multiscreensite.com](http://irp-cdn.multiscreensite.com)

Fuente de Internet

<1 %

28

[redlara.com](http://redlara.com)

Fuente de Internet

<1 %

29

[repositorio.unprg.edu.pe](http://repositorio.unprg.edu.pe)

Fuente de Internet

<1 %

30

[www.olir.it](http://www.olir.it)

Fuente de Internet

<1 %

31

shaker.umh.es

Fuente de Internet

<1 %

32

biblioteca.cejamericas.org

Fuente de Internet

<1 %

33

doku.pub

Fuente de Internet

<1 %

34

reliefweb.int

Fuente de Internet

<1 %

35

mpd.jusentrerios.gov.ar

Fuente de Internet

<1 %

36

Submitted to Universidad Continental

Trabajo del estudiante

<1 %

37

busquedas.elperuano.pe

Fuente de Internet

<1 %

38

cieg.unam.mx

Fuente de Internet

<1 %

39

lpderecho.pe

Fuente de Internet

<1 %

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 15 words

Excluir bibliografía

Activo





## Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Juliana Pamela Gastelo Villena  
Título del ejercicio: REVISION DE TESIS  
Título de la entrega: ANÁLISIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N.º 1459 Y DEL DECRET...  
Nombre del archivo: TESIS\_JULIANA\_PAMELA\_GASTELO\_VILLENA.docx  
Tamaño del archivo: 375.24K  
Total páginas: 92  
Total de palabras: 17,306  
Total de caracteres: 93,823  
Fecha de entrega: 30-may.-2022 10:21a. m. (UTC-0500)  
Identificador de la entre... 1847263827

	<b>UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO</b> FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS	
<b>INFORME FINAL</b>		
<b>ANÁLISIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N.º 1459 Y DEL DECRETO SUPREMO N.º 004-2020-JUS EN FUNCIÓN A LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PERUANA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, CHICLAYO 2020</b>		
<b>ASESOR:</b> Abg. Cesar Vargas Rodríguez		
<b>PRESENTADO POR:</b> Bach. Juliana Pamela Gastelo Villena		
<b>PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO</b>		
<b>LAMBAYEQUE, 2022</b>		